



Reshaping treatment
approaches towards
victims of sexual violence
within criminal proceedings.

Capítulo 4

Estudio comparativo sobre tratamiento procesal a víctimas de violencia sexual en España, Grecia e Italia



Financed by
The European Union
Justice Program (2014-2020)

Autoría

Sabela Oubiña Barbolla¹, Helena Soleto Muñoz², Nieves Pérez-Mata¹, Daniel Rodríguez Horcajo¹, Margarita Diges Junco¹, Miriam Peláez Devesa¹, Jessica Jullien de Asís², Aurea Grané², Candela Galán González¹, Manuel Cancio Meliá¹, Jose Alberto Revilla González¹.

¹ Universidad Autónoma de Madrid. ² Universidad Carlos III de Madrid

Traducción

Sabela Oubiña, Anna Fiodorova

ÍNDICE

1. Introducción.....	170
1.1. Apunte sobre la metodología.....	171
2. Aproximación a delitos sexuales en el sur de Europa: ES, GR, IT.....	174
2.1. Evolución general de la regulación	174
A. Un cambio de paradigma: de la tutela de la moral sexual predominante en la sociedad a la protección efectiva de la libertad sexual	174
B. El consentimiento sexual como figura jurídica central.....	176
C. La tutela diferenciada de adultos y menores como víctimas de violencia sexual	176
2.2. Rasgos generales de los tipos del derecho penal sexual.....	177
A. El debilitamiento del principio de legalidad	177
B. La violencia o intimidación como parámetro diferenciador del tipo.....	177
C. La disparidad en la determinación de la pena de los delitos sexuales: agravación o atenuación	179
D. La ampliación de las conductas típicas relacionadas con víctimas menores.....	180
2.3. Rasgos generales de las penas asociadas a los delitos sexuales	180
2.4. Consideración de los delitos sexuales como delitos públicos o privados.....	182
3. Datos y perfil.....	183
3.1. La importancia de los datos.....	183
3.2. Una panorámica de los delitos sexuales en España, Grecia e Italia en cifras	185
A. Tipo de delito	186
B. Sujetos y estatus procesal.....	187
B.1. Agresiones sexuales.....	188
B.2. Violaciones	189
C. Personas privadas de libertad.....	190
4. Teoría y práctica en el tratamiento de la víctima de violencia sexual en los sistemas de justicia criminal griego, italiano y español: una mirada al hilo de la directiva.....	191
4.1. Información y apoyo	192
A. El derecho a entender y ser entendido/a	193
B. El derecho a ser acompañada.....	193
C. Los derechos a recibir información: desde el primer contacto con una autoridad competente y sobre su causa.....	195
D. El derecho de las víctimas al tiempo de denunciar.....	195
E. Los derechos de “acceso a” y el “apoyo integral de” los servicios de apoyo a las víctimas	198

4.2. Participación en el proceso penal.....	200
A. Los derechos a justicia gratuita y al reembolso de gastos.....	200
B. El derecho a ser oído/a	201
B.1. En la fase de investigación o preprocesal	202
B.2. En la vista oral	202
4.3. Protección general y necesidades de especial protección	203
A. El derecho al menor número de declaraciones y reconocimientos médicos.....	203
B. El derecho a que el profesional receptor de la denuncia sea del mismo sexo	205
C. El derecho a profesionales especializados	206
D. El derecho a un entorno físico: adecuado y/o adaptado.....	208
D.1. Las comisarías y los hospitales.....	209
D.2. Los órganos judiciales	209
E. La salvaguarda de la dignidad, intimidad y privacidad de la víctima.....	211
E.1. El derecho a que se eviten preguntas sobre su vida personal	211
E.2. El derecho a la privacidad de la víctima.....	213
G. Los derechos de la víctima y los tempos del procedimiento: la espera y la duración.....	214
4.4. La indemnización por parte del infractor o la compensación/ayuda por parte del estado	215
A. Cuestiones generales.....	215
B. La indemnización de la víctima a cargo del agresor	217
C. Posibilidad de una compensación o ayuda a cargo del Estado	219
4.5. Ausencia de justicia restaurativa	221

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo al igual que esta obra forma parte del proyecto europeo RE-TREAT que comenzó el 1 febrero de 2020 y finalizó en 30 enero de 2022. El objetivo general del proyecto RE-TREAT era impulsar cambios procesales y organizativos en los procedimientos penales dentro de los sistemas de justicia español, griego e italiano para mejorar su capacidad de respuesta a las necesidades particulares de las víctimas de delitos sexuales.

Por eso, el consorcio RE-TREAT realizó un estudio exhaustivo sobre la aplicación de la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (en lo sucesivo VRD, siglas por *Victim's Rights Directive*).

La Directiva establece como regla general, en todos los Estados Miembros (en adelante EEMM) la necesaria evaluación individual para todas las víctimas de delitos, considerando las características personales de la víctima y la naturaleza y características especiales del delito; y en ese punto, la VRD se refiere expresamente a la violencia sexual.

Los EEMM traspusieron a sus respectivos ordenamientos jurídicos el contenido de la Directiva en la idea de mejorar los derechos de las víctimas de delitos. Sin embargo, las víctimas de delitos sexuales siguen a menudo siendo revictimizadas por sistemas de justicia que no están adaptados a sus derechos y necesidades. Los profesionales siguen careciendo de capacitación y formación especializada para tratar a las víctimas de delitos sexuales.

En estas circunstancias, el equipo de investigación RE-TREAT ha estudiado hasta qué punto los sistemas de justicia penal en España, Grecia e Italia tratan bien a las supervivientes de la violencia sexual. La respuesta no sólo es importante para las víctimas, sino que también es un mensaje a la Sociedad (ciudadanos, familiares, profesionales, responsables de políticas públicas, etc.) sobre cómo debemos enfrentarnos y tratar la violencia sexual desde el punto de vista de la víctima. Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de investigación se planificó en tres fases, cada una con diversas actividades, tanto de investigación como de comunicación. En el esquema infra se encuentra un resumen de estas actividades.

Fase 1. INVESTIGAR

Fase 2. EMPODERAR

Fase 3. COMUNICAR

- **Fase 1. INVESTIGAR:** Análisis del contexto en cada uno de los tres países (España, Grecia e Italia). Identificación y estudio de buenas prácticas más allá de nuestras fronteras.
- **Fase 2. EMPODERAR:** Desarrollo del Código de conducta¹ en esta materia y diferentes actividades de formación para los profesionales de los sistemas de justicia penal.
- **Fase 3. COMUNICAR:** Actividades de sensibilización en la materia.

¹ Y estándares en la práctica: <https://sexualviolencejustice.eu/wp-content/uploads/2022/06/RE-TREAT-Practice-Standards.pdf>

De la Fase 1 resultaron, entre otros, los siguientes informes. Por un lado, tres informes nacionales, uno por cada país (España², Grecia³ e Italia⁴), que identifican los obstáculos específicos a los que se enfrentan las víctimas de delitos sexuales en cada fase del proceso penal; los informes se publicaron en inglés. El trabajo y la responsabilidad de cada informe correspondió a los respectivos grupos de investigación nacionales⁵ que integraban el consorcio RE-TREAT; los equipos elaboraron también un breve informe ejecutivo nacional a modo de resumen. Un informe⁶ de carácter transnacional sobre las tendencias generales comunes a los tres países mediterráneos objeto de estudio (ES-GR-IT⁷) y las características específicas de cada país en relación con los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de delitos sexuales en los sistemas de justicia penal español, griego e italiano.

Precisamente, este capítulo recoge un resumen de las claves más importantes del informe comparado transnacional. Una aproximación a los *obstáculos*, comunes y específicos, a que se enfrentan las víctimas de delitos sexuales cuando acuden al sistema de justicia penal en los tres EEMM mediterráneos: España, Grecia e Italia; una sección que necesariamente toma como punto de partida los informes nacionales presentados por los respectivos equipos de investigación del Proyecto RE-TREAT durante el primer trimestre de 2021.

1.1. Apunte sobre la metodología

Este Informe Transnacional se ha elaborado siguiendo diferentes metodologías según el eje de cada sección. Un análisis descriptivo del estado de la cuestión en los tres países mediterráneos citados, basada en sus respectivos informes nacionales RE-TREAT

² El informe nacional español puede consultarse en: <https://sexualviolencejustice.eu/wp-content/uploads/2021/03/National-report-Spain-10-marzo-17h-1.pdf>

³ El informe nacional griego está disponible en: https://sexualviolencejustice.eu/wp-content/uploads/2021/04/Retreat-report-greece_final_english-02.21.pdf

⁴ El informe nacional italiano consultarse en: https://sexualviolencejustice.eu/wp-content/uploads/2021/03/RETREAT_Italian-National-Report_ENG.pdf

⁵ Los socios italianos de RE-TREAT eran: EuroCrime y la Universidad de Sassari (UNISS). El socio griego es Unión de Asociaciones de Mujeres de la Prefectura de Heraklion (UWAH). Los equipos españoles unían a la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Para saber más sobre la autoría, consulte el informe nacional RE-TREAT de cada país en la página del proyecto: <https://sexualviolencejustice.eu/>

⁶ En el marco de RE-TREAT se elaboró un *Comprehensive report* que correspondió a los equipos españoles y belga; este report incluía además del informe transnacional objeto de este capítulo, un capítulo relativo a *Best practices in support for victims of sexual and gender-based violence*, del equipo de la Catholic University of Leuven. El texto completo del comprehensive report, incluidos los dos capítulos sólo está disponible en lengua inglesa en <https://sexualviolencejustice.eu/wp-content/uploads/2022/06/RE-TREAT-Transnational-report.pdf> Un informe previo también sobre buenas prácticas, en: <https://sexualviolencejustice.eu/wp-content/uploads/2022/01/Defining-good-practices.pdf>

⁷ A lo largo del capítulo utilizaremos las siglas ES (España), GR (Grecia) e IT (Italia) para especificar si los datos corresponden a los informes nacionales español, griego o italiano, así como a los correspondientes equipos nacionales de investigación.

(ES-GR-IT). Como muestran los informes nacionales (ES-GR-IT) de RE-TREAT, la metodología seguida por cada uno de los grupos de investigación nacional fue diferente debido a numerosas circunstancias. De hecho, ha sido realmente difícil desarrollar la sección comparada de este Informe Transnacional porque no era fácil integrar la información de cada informe nacional al no ser estrictamente comparable.

En su plan inicial, el proyecto preveía que grupo de investigación realizase su respectivo informe no sólo desde el punto de vista teórico a partir de una revisión bibliográfica, sino también empírico y práctico con un análisis de la jurisprudencia y una revisión de los expedientes. Este análisis empírico-práctico tenía previsto efectuarse en diferentes niveles: a) Análisis de expedientes policiales y fiscales; b) Análisis de expedientes judiciales; c) Análisis de jurisprudencia; y d) Entrevista a víctimas y profesionales del sistema de justicia criminal (en lo sucesivo, SJC) especializados en el tratamiento de víctimas de delitos sexuales.

El estallido de la pandemia de COVID-19 apenas un mes después de comenzar el proyecto de investigación, impidió a los grupos de investigación nacionales desarrollar algunas de las tareas previstas; p.ej. los investigadores no podían realizar el análisis de los expedientes judiciales, fiscales y policiales porque físicamente era imposible acceder a las sedes correspondientes por el confinamiento y los protocolos posteriores. Teniendo en cuenta lo anterior y las “distintas” gestiones de la pandemia que se siguieron en cada país, la asociación RE-TREAT acordó cambiar algunos puntos de la metodología relativa a los informes analíticos nacionales. Así, en lugar de analizar los expedientes judiciales, fiscales y policiales, los equipos nacionales de investigación -encargados de cada informe nacional- intentarían contrarrestar el imposible acceso a los expedientes, aumentando el número de entrevistas sobre derechos de las víctimas sexuales y profundizando la información a recabar.

Según la reformulación, las entrevistas debían cubrir diferentes grupos de profesionales: Jueces, fiscales, abogados, ONG, agentes de policía, personal sanitario, así como servicios de atención a las víctimas y víctimas de violencia sexual. La mayoría de las entrevistas se realizaron entre junio y septiembre de 2020. Sin embargo, el número de entrevistas, el ámbito profesional de los entrevistados y la solidez de la información obtenida fueron muy diferentes de un país a otro. En la tabla siguiente se presenta un resumen.

Número de entrevistas por cada grupo de participantes en el proyecto. Elaboración propia.

Entrevista	Grecia	Italia	España
Poder Judicial	0	6	5
Ministerio Fiscal	0	4	5
Policía	2	5	4
Abogados	3	7	6
Personal sanitario	1	0	7
Servicios de atención a las víctimas	3	7	12
Víctimas	3	0	6
Total	12	29	45

Por ilustrar la dispar calidad del estudio cualitativo efectuado por los respectivos equipos nacionales entre los tres países en España se entrevistó al doble de víctimas de violencia sexual que en Grecia; en Italia no se entrevistó a ninguna víctima; y en Grecia no se entrevistó a Jueces, ni a Fiscales. En el caso de las entrevistas a víctimas, en España se realizaron seis; en cinco de ellas no habían transcurrido más de dos años desde que se cometió el delito sexual. En Grecia se entrevistó a tres mujeres, pero dos de ellas quedaban en principio fuera del estudio porque habían sido víctimas de abusos sexuales en la infancia (cuando el proyecto se refería a priori a víctimas adultas), pero es que además en los tres casos habían transcurrido más de 20 años con lo que la información relativa al funcionamiento del sistema de justicia penal griego era relativamente antiguo y quizá desactualizado porque aunque hay muchas cosas que mejorar, en los últimos años también en Grecia se han producido cambios sustanciales en el trato a las víctimas.

Por lo tanto, sólo disponemos de datos de primera mano proporcionados por las víctimas en España, y para los otros dos países -Grecia e Italia-, la información procede de fuentes secundarias. En Grecia de agentes de policía, abogados, un psicólogo infantil, un criminólogo y profesionales de la salud mental; en Italia de agentes de policía y carabinieri, fiscales, abogados y profesionales de los servicios de atención a las víctimas. En España, el estudio de campo ha abarcado ampliamente todos los sectores: judicatura, fiscalía, cuerpos policiales, personal sanitario, servicios de atención a las víctimas y víctimas.

Teniendo esto en cuenta, todos los equipos nacionales de investigación responsables de los Informes nacionales dentro del marco de RE-TREAT realizaron un enorme esfuerzo para obtener información relevante y realista sobre la situación de las víctimas de delitos sexuales en sus países a partir de las entrevistas y otras actividades: datos estadísticos oficiales; muestra estadística de otros datos de investigación; jurisprudencia sobre este tema, etc.

Sin embargo, de nuevo, los tres Informes RE-TREAT nacionales⁸ revelan muchas diferencias cuantitativas y cualitativas entre los estudios de jurisprudencia. El origen de este contraste se encuentra en la accesibilidad a las resoluciones judiciales. Mientras que España cuenta con un sistema público de acceso a la gran mayoría de las resoluciones judiciales (CENDOJ), tras su anonimización, Italia y Grecia no disponen de un sistema similar, por lo que sólo se puede acceder a las resoluciones judiciales de algunos órganos judiciales y no es nada fácil. El Informe RE-TREAT italiano indica un seguimiento de 914 sentencias y autos del Tribunal Supremo italiano, relacionadas directa e inmediatamente con el delito de violencia sexual. Teniendo en cuenta que, según el equipo de investigación italiano⁹, muchas de ellas repetían los mismos principios jurídicos, el estudio detallado sólo se realizó sobre 25 resoluciones del Tribunal Supremo italiano (14 sentencias y 11 ordenanzas). El informe RE-TREAT griego estudió 30 resoluciones del Tribunal Supremo griego (2014-2020) relacionadas con delitos sexuales. En España, la jurisprudencia analizada fue muchísimo más amplia: , 2.265 sentencias dictadas entre 2014-2018 por la mayoría de los órganos judiciales penales españoles, que incluyen 540 resoluciones del Tribunal Supremo,

⁸ Para información más detallada, véanse los respectivos informes nacionales de RE-TREAT (español, griego e italiano).

⁹ EuroCrime.

209 de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y 1.522 de las Audiencias Provinciales.

Con todo ello, obtenemos una imagen panorámica de los retos y maltratos que tienen que sufrir las víctimas a lo largo del proceso penal según los estándares del VRD.

2. APROXIMACIÓN A DELITOS SEXUALES EN EL SUR DE EUROPA: ES, GR, IT

2.1. Evolución general de la regulación

Tomar una perspectiva transnacional sobre un tema tan complejo y culturalmente¹⁰ condicionado dificulta encontrar patrones comunes en la evolución de las regulaciones estatales. A pesar de ello, a muy grandes rasgos, pueden percibirse las siguientes tendencias. Antes de continuar, debe advertirse al lector que en este capítulo se recoge un resumen del informe transnacional de junio de 2021 del proyecto de investigación RE-TREAT y que el proyecto de investigación concluyó el 30 de enero de 2022. En el caso español las reflexiones comparadas están pensadas en la redacción del Código Penal español “vigente” en julio de 2022 que es la fecha del cierre de estas líneas. No obstante, parece que será objeto de una modificación en este punto en poco tiempo ya que se está discutiendo en las Cortes españolas, un *Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual*¹¹ (en adelante Proyecto LOGILS) que tiene todos los visos de salir adelante. El proyecto modificaría algunas cuestiones importantes en esta materia. Por fidelidad al resultado de la investigación realizada en el marco del proyecto RE-TREAT, no hemos modificado las ideas del informe transnacional original redactado repetimos antes de conocer el devenir del citado Proyecto. No obstante, advertiremos al lector los puntos donde debería consultar la redacción del CP que resulte dependiendo de los términos en que salga adelante el Proyecto de LOGILS.

A. Un cambio de paradigma: de la tutela de la moral sexual predominante en la sociedad a la protección efectiva de la libertad sexual

El Derecho penal sexual de Grecia, Italia y España se ha ido desvinculando progresivamente de la tutela de la moral sexual predominante en la sociedad del momento para centrarse en la protección de la libertad sexual individual. Este cambio radical llegó, tanto en Italia como en España, fundamentalmente en los años 90 (Ley 66/1996, en el

¹⁰ De la mejor a la peor posición en la UE en el Índice de Igualdad de Género (EIGE, 2020): ES ocupa la 8ª posición con 72/100 puntos; IT es la 14ª con 63,5/100 puntos; GR se mantiene en la última posición (28ª, 52,2/100 puntos) desde 2010. IT progresa más rápido que otros EEMM. Sin embargo, ES es el único de los tres cuya puntuación está por encima de los medios de la UE.

¹¹ El Proyecto de LO de garantía integral de libertad sexual se presentó por el Gobierno el 7 de julio de 2021, el texto inicial de la iniciativa se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados) el 26 de julio de 2021. Al cierre de estas líneas, julio de 2022, estaba en el trámite de enmiendas en el Senado.

caso de Italia -que deja de considerar estos tipos como “delitos contra la moral pública” para pasar a considerarlos “delitos contra las personas”-, y Ley Orgánica 3/1989, en el caso de España -que olvida el rótulo “delitos contra la honestidad” para centrarse en la tutela de la “libertad sexual”-. Por contraposición, la evolución de Grecia en este sentido ha sido más tardía (con la muy recientemente aprobada Ley 4367/2019).

En cualquier caso, ya es una realidad la desaparición en estos tres códigos penales de tipos tan desvinculados de la libertad sexual como los que castigaban, por ejemplo, la práctica de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo (antiguo art. 347 CP griego), el adulterio (antiguos arts. 449-452 CP español), o los denominados delitos de escándalo público (antiguos art. 353 par. 1 CP griego y 431-433 CP español), lo que supone una adaptación de estos ordenamientos a una forma mucho más abierta y diversa de entender todo lo relacionado con la sexualidad. Aun así, hay que destacar que, si se compara con otros países europeos, este cambio nuclear ha llegado a los tres países con algo de retraso, lo que puede explicarse, además de por cuestiones políticas de cada momento, por la existencia en los países del sur de Europa de una educación y expresión sexual altamente tabuizada y vinculada intensamente con planteamientos religiosos, lo que durante un tiempo privó a estos países de reconfigurar el Derecho penal sexual para centrarlo exclusivamente en la tutela de la libertad sexual (y, en el trasfondo, tanto de la integridad moral y física, como del derecho a la intimidad).

Sin dejar de afirmar todo lo anterior, conviene hacer dos matizaciones a esta idea general. Por un lado, no parece que esta transición se haya completado en el caso del país heleno, ya que en su Código penal todavía se opta por castigar conductas como el mantenimiento de relaciones sexuales entre parientes (art. 345 CP griego -aunque castiga la mayoría de las conductas típicas, al menos alternativamente, con una pena de multa-) o el exhibicionismo ante adultos (art. 337.1 CP griego, en el que al menos se exige que la actuación “brutally insults the honor of another”). Estas dos conductas típicas sólo se pueden relacionar con la tutela de la libertad sexual de manera muy difusa, pareciendo que, al menos con relación al fenómeno sexual, todavía quedan ciertos vestigios del pasado en el Código Penal griego. Por otro lado, en los tres ordenamientos se observa una incipiente “remoralización” en este campo, muy especialmente con relación al Derecho penal sexual de menores, en el que algunas de las conductas castigadas no suponen más que una ofensa a sentimientos socialmente generalizados (el ejemplo paradigmático es el de la punición de diversas conductas vinculadas con la pornografía infantil, entendiendo esta última también como aquella en la que se simulan conductas sexuales con menores -art. 384 A’ CP griego; art. 600-ter CP italiano; art. 189 CP español-, llegando al extremo en el caso español, donde también se considera pornografía infantil aquella en la que los intervinientes simplemente parezcan ser menores de edad o aquella en la que se utilizan “imágenes realistas” de menores -aunque esto último también se comprende por el art. 600.ater.1 CP italiano-)¹².

¹² En todos estos casos, hay que destacar que esta visión amplia del concepto de ‘pornografía infantil’ proviene de la definición aportada por el art. 2.c de la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.

B. El consentimiento sexual como figura jurídica central

En los tres ordenamientos se considera ahora al consentimiento sexual como figura jurídica central. En la medida en que el bien jurídico protegido por estos delitos es la libertad sexual, implícita o explícitamente se reconoce que el consentimiento de las partes que intervienen en la conducta sexual es causa de atipicidad de la misma (vid. art. 336 CP griego; art. 609-bis CP italiano; arts. 178-181 CP español¹³). En este sentido, los delitos se entienden cometidos cuando la víctima no acepta la práctica sexual que sea, medie o no violencia o intimidación (pues puede haber ausencia de consentimiento aun sin estas), y tengan los sujetos activo y pasivo la relación que tengan (es importante destacar la modificación del art. 336 CP griego que, hasta 2006, optaba por la no sanción penal de la violación dentro del matrimonio¹⁴). Esta evolución supone correlativamente el reconocimiento de la victimización de una persona concreta (la que ve coartada su libertad sexual al no consentir un acto sexual determinado -normalmente una mujer-) y el olvido de una especie de “transferencia de victimización” (al honor de la familia de la víctima material, al del marido de la misma,...), lo cual, al margen de cuestiones estrictamente jurídicas, supone un avance evidente tanto en el trato a las víctimas como en la prevención de estas conductas.

C. La tutela diferenciada de adultos y menores como víctimas de violencia sexual

Los ordenamientos de estos tres países regulan de manera diferenciada la violencia sexual sufrida por adultos y por menores. Esta cuestión está también relacionada con la centralidad del bien jurídico libertad sexual en estos delitos y la importancia de la existencia o no del consentimiento en las relaciones sexuales. Dicha libertad (por tanto, la posibilidad de consentir válidamente la práctica de relaciones sexuales) no se reconoce a las personas que tienen menos de una cierta edad, por lo que en estos supuestos procede la tutela de otro bien jurídico, que, por ejemplo, en el caso español se ha denominado como “indemnidad sexual”, y que en todo caso parece tener como objetivo principal el mantenimiento de un adecuado desarrollo físico y psíquico de los menores.

La mayor divergencia que se produce en este punto entre los tres ordenamientos es la “edad” que se fija como relevante a los efectos del consentimiento sexual; es decir, la que determina el momento en el que se considera que una persona puede consentir válidamente una relación sexual en ejercicio de su plena autonomía. El ordenamiento

¹³ Nótese que una de las novedades del Proyecto de LOGILS es que el legislador español definiría qué debe entenderse por consentimiento: *(s)ólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona* (art. 178.1.II CP). Sin perjuicio de lo anterior, subraya que se consideran en todo caso agresión sexual (...) también los actos de contenido sexual *se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad*

¹⁴ Greek Law 3005/2006 for combating domestic violence. Una evolución de la legislación griega en este campo hasta 2017, en KOSYFOLOGOU, A., “The gendered aspects of the austerity regime in Greece: 2010-2017”, *Studies Austerity, Gender inequality and Feminism after the crisis*, June, 2018, p. 17.

más conservador en esta materia es el español, que fija la edad de consentimiento sexual válido en los 16 años (arts. 183 y ss. CP español). El ordenamiento italiano otorga validez a este consentimiento si proviene de un mayor de 14 años (arts. 609 quater y quinquies CP italiano -aunque con relación a ciertas conductas esta edad se eleva hasta los 16 años, como p.ej. en los arts. 609 quater. 2 y undecies CP-). Y el griego hace lo propio cuando se presta por personas de al menos 15 años (art. 339 CP griego -habiendo sido derogado su apartado 3, en el que se declaraban como no punibles los delitos sexuales cometidos sobre menores siempre que el autor de los mismos contrajese matrimonio con la víctima-).

2.2. Rasgos generales de los tipos del Derecho penal sexual

Cuando se trata de la aproximación a la regulación concreta actual que cada uno de estos tres ordenamientos hace sobre los delitos sexuales, la capacidad para hacer un estudio agregado es mucho menor, pues hay que tomar en consideración la influencia de distintas vicisitudes históricas y políticas en la tipificación por cada legislador nacional de los delitos sexuales. En cualquier caso, y en la medida en que existe un sustrato común estrechamente vinculado con el bien jurídico protegido en los mismos, también se puede intentar pergeñar algunos rasgos comunes en la tipificación de los delitos sexuales en Grecia, Italia y España.

A. El debilitamiento del principio de legalidad

Por razón del objeto de tutela, en los tres ordenamientos se puede verificar en este campo un cierto debilitamiento del principio de legalidad, en especial con relación al mandato de determinación. Por lo complejo de la definición de estas conductas típicas, todos los ordenamientos analizados recurren a conceptos amplios y relativamente vagos (p.ej. “acts of equal weight” que una relación sexual -art. 336.2 CP griego-, “casi di minore gravità” -art. 609-bis *in fine* CP-, “atenta[do] contra la libertad sexual” -arts. 178 y 181 CP español-) que requieren de una interpretación jurisprudencial intensa y siempre vinculada a la norma de sanción para respetar el principio de proporcionalidad. Esto hace que el análisis exclusivo del tenor literal de los artículos de los Códigos Penales sólo ofrezca una visión parcial de las conductas con connotación sexual que pueden o no atentar contra la libertad sexual, haciéndose necesaria una lectura sistemática junto con la jurisprudencia sobre la materia.

B. La violencia o intimidación como parámetro diferenciador del tipo

Los tres ordenamientos distinguen expresamente entre dos formas de agresión al bien jurídico *libertad sexual* dependiendo que medie violencia o intimidación¹⁵ o no ha-

¹⁵ El art. 36 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (en lo sucesivo, el Convenio de Estambul) que han ratificado los tres países

ciéndolo. Sin embargo, esta distinción es más específica en Grecia y también lo en España (al menos hasta el Proyecto LOGILS) que utilizan esa circunstancia para diferenciar la agresión del abuso sexual; vid. en el caso de concurrir, art. 336.1 CP griego, agresión sexual en los arts. 178¹⁶ y 179 CP español y, cuando no concurre arts. 336.4 y 337 CP griego, como abusos sexuales en los arts. 181 y 182 CP español¹⁷ (hasta el Proyecto de LOGILS). Por su parte, el Código Penal italiano sólo castiga el delito sexual cuando se utiliza violencia, intimidación o abuso de autoridad en su ejecución¹⁸ (art. 609.bis CP italiano), aunque la interpretación jurisprudencial es bastante extensiva, incluyendo allí también los actos con contenido sexual que se realizan de manera sorpresiva, de tal forma que la víctima no puede resistirse mínimamente¹⁹. Desde un punto de vista puramente nominal, sólo el ordenamiento español optaba hasta el Proyecto de LOGILS²⁰, de 6 de septiembre por categorizar estas dos conductas de manera separada (hablando de “agresión sexual” cuando media violencia o intimidación, y de “abuso sexual” cuando no lo hace), mientras que el italiano utiliza la categoría general de “violencia sexual”²¹. Por su parte, el ordenamiento griego califica las conductas en las que no media violencia o intimidación en algunos casos como “violación” (art. 336.4 CP griego), y en otros como “assault of sexual dignity” (art. 337.1 CP griego).

(España e Italia En 2014 y Grecia en 2018) fija en la *falta de consentimiento* el punto de inflexión de lo que constituye o no un delito de violencia sexual. Por tanto, en los delitos de violencia sexual es suficiente que la víctima no consienta y no es necesario que exprese oposición o resistencia. Un aspecto en el que insisten los informes FRA y GREVIO. FRA, 2019, epígrafe 9.3.3., pp. 2010-211. GREVIO, Spain Report, 2020, en especial apartados, 221-222 y 224. GREVIO Italy Report, 2019, p. 63, en especial apartado 191.

¹⁶ El art. 178 CP español castiga, antes del Proyecto de LOGILS, como agresión sexual al que *atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación*, mientras que la nueva versión del mismo precepto recoge tipifica como agresión sexual *el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento* y, en todo caso además de los que ya se recogían antes (empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima), *los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad*.

¹⁷ Versión del precepto antes del Proyecto de LOGILS. El art. 181 CP, todavía vigente antes del citado proyecto, castiga como abuso sexual *al que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realice actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona (...)*; entendiéndose también como abusos sexuales *no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto*; cuando el consentimiento se obtenga prevaleciendo el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.

¹⁸ Precisamente, el informe GREVIO/Inf(2019)2, 13rd January 2020, urge a Italia a modificar el delito de violencia sexual en el Código Penal italiano a fin de que recoja, como exige el art. 36.1 del Convenio de Estambul, la noción de consentimiento otorgado libremente.

¹⁹ Los actos considerados violencia sexual incluyen: tocar el muslo de otro pasajero en el autobús (Tribunal Supremo - Segunda Sala de lo Penal - Sentencia de 19.03.2008 n. 12157), y tocar el pecho (Tribunal Supremo - Tercera Sala de lo Penal - Sentencia de 5 de abril - 22 de mayo de 2007, n. 19718).

²⁰ El Proyecto de LOGILS prevé eliminar el término “abuso sexual” y con él la distinción que existe entre abuso y agresión sexual, recogiendo ahora todo bajo la fórmula “agresión sexual”.

²¹ Véase, la explicación de Italia sobre los datos de EUROSTAT.

C. La disparidad en la determinación de la pena de los delitos sexuales: agravación o atenuación

En los tres ordenamientos se observa una disparidad relativamente amplia a la hora de agravar o atenuar los delitos sexuales. Hay supuestos en los que los tres legisladores han optado por la agravación (p.ej. la comisión grupal de los delitos sexuales -arts. 336.3 CP griego, 609-octies CP italiano, 180.1 CP español²²), pero otros en los que esta coincidencia no existe (p.ej. tanto Italia como España han entendido necesario agravar estos delitos cuando se utilizan armas peligrosas en su comisión -arts. 609-ter.2 CP italiano y 180.1.5ª CP español-, pero no ha procedido igual el ordenamiento griego).

Adicionalmente, España distingue a efectos punitivos entre los delitos sexuales que implican acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por vía vaginal o anal a la víctima y los que no, castigando más los primeros (sean agresiones o abusos²³ sexuales -arts. 179 y 181.4 CP español, respectivamente-), mientras que esto no sucede ni en el Código griego (al menos exactamente, pues una de las diferencias entre los tipos de los arts. 336 y 337 CP griego es que en el primero se produzca un “sexual intercourse” o “acts of equal weight” -lo que puede no implicar el acceso a la víctima-, y en el segundo no) ni en el italiano, optando ambos por incluir dentro de la categoría general de delito contra la libertad sexual actos que implican ese acceso, pero también actos que no lo conllevan.

Lo más llamativo es que también se pueden encontrar circunstancias que tienen un efecto inverso en distintos ordenamientos (p. ej., la denominada “sumisión química”, que en España ha funcionado hasta el Proyecto de LOGILS como atenuante²⁴ por convertir esos casos en supuestos de *abuso sexual* -derogado art. 181.2 CP español- y que en Italia opera como agravante -art. 609-ter 2 CP italiano-, y otros que tienen un tratamiento radicalmente diverso (p. ej., la realización de actos sexuales mediando abuso sobre personas con discapacidad psíquica o física “sin uso de violencia o intimidación”, que el Código italiano trata como un supuesto ordinario de violencia sexual -art. 609-bis CP italiano-, el Código griego regula como un delito específico, aunque con pena atenuada en relación con el delito de violación -art. 338 CP griego-, y el Código español trata como un supuesto de abuso²⁵ sexual ordinario - art. 181.2 CP español- hasta el Proyecto de LOGILS).

²² El Proyecto de LOGILS sigue previéndola como una de las agravantes, sin perjuicio de añadir otras nuevas.

²³ Recordemos el Proyecto de LOGILS el legislador penal español diferencia entre abuso y agresión sexual.

²⁴ Nótese que en el Proyecto de LOGILS, el legislador no diferencia entre abuso y agresión sexual y, tipifica expresamente como agresión sexual esta conducta y además “agravada” al preverse entre las circunstancias agravantes en el art. 180.1: *Cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.*

²⁵ En el Proyecto de LOGILS desaparece no sólo la distinción que hasta entonces existía entre agresión y abuso sexuales, sino también como criterio la existencia o no de violencia-intimidación trasladándose la clave en el nuevo modelo al consentimiento.

D. La ampliación de las conductas típicas relacionadas con víctimas menores

En los tres ordenamientos objeto de estudio se produce una ampliación de las conductas típicas relacionadas con la violencia sexual ejercida sobre menores de edad, que van más allá de lo que, de manera genérica, puede ser considerado como un atentado sexual en sentido estricto y próximo. Esto es evidente, p.ej., en todo lo que tiene que ver con la sanción de las conductas vinculadas con la pornografía infantil (arts. 348 A' CP griego, 600-ter CP italiano, 189 CP español) o con el *child grooming* (arts. 337.3 CP griego, 609-undecies CP italiano, 183 ter CP español en su versión anterior al Proyecto de LOGILS y actual art. 183 CP).

Sin embargo, y ante el progresivo incremento de la edad de consentimiento sexual, los tres legisladores han tenido que prever cláusulas que excluyan de punición las relaciones sexuales entre menores, aunque cada uno lo ha hecho con matices propios (p. ej., el Código penal griego opta por no castigar las relaciones sexuales entre menores de quince años, salvo que su diferencia en edad sea superior a tres años -art. 339.2 CP griego-, el ordenamiento italiano opta por no sancionar las relaciones sexuales con mayores de trece años, siempre que las partes no tengan entre sí una diferencia de edad superior a los cuatro años -art. 609-quater CP italiano-, y el legislador español permite las relaciones sexuales con menores de dieciséis años, siempre que el otro interviniente sea próximo en edad y grado de desarrollo y madurez al primero -art. 183 quater CP español antes del Proyecto de LOGILS²⁶-).

2.3. Rasgos generales de las penas asociadas a los delitos sexuales

Los códigos penales²⁷ de Grecia, Italia y España tienen distintos sistemas de atribución de escalas penales a los tipos y también distintos sistemas de individualización de la pena, por lo que, de nuevo, es complejo proceder a una comparación en este punto. En cualquier caso, parece claro que en los tres ordenamientos se ha producido un incremento al alza de las penas vinculadas a este tipo de delincuencia en los últimos años (claramente, p.ej. por la reforma operada en el Código Penal italiano por la Ley 69/2019, o por las reformas operadas en el Código Penal español por las Leyes Orgánicas 11/1999 y 5/2010).

²⁶ Una disposición que con algunas modificaciones se recoge también en el Proyecto de LOGILS en el art. 183 bis CP español: Salvo en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 178.2 CP (recordemos: violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad), *el libre consentimiento del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.*

²⁷ Para más detalles, vid. Anexo I.

Ejemplos de escalas penales de los tipos de delito sexual en ES-GR-IT. Elaboración propia.

Penas	Grecia	Italia	España	
			Redacción Vigente julio de 2022	Según Proyecto de LOGILS
Delito sexual más grave (sin agravantes)	Prisión de al menos 10 años (art. 336.1 CP griego)	Prisión de 6 a 12 años (art. 609-bis CP italiano)	Prisión de 6 a 12 años (art. 179 CP español)	Prisión de 4 a 12 años (art. 179 CP español)
Delito sexual más grave cometido en grupo	Prisión de al menos 10 años (art. 336.3 CP griego)	Prisión de 8 a 14 años (art. 609-octies CP italiano)	Prisión de 12 a 15 años (art. 180.1 CP español)	Prisión de 7 a 15 años (art. 180.1 CP español)
Delito de child grooming	Prisión de al menos 3 años (art. 337.3 CP griego)	Prisión de 1 a 3 años (art. 609-undecies CP italiano)	Prisión de 1 a 3 años o multa (sólo cambia el número de precepto, antes de la reforma se regulaba en el art. 183 ter CP español antes de la reforma y, ahora en el art. 183 CP español)	

Por otra parte, se puede tener una impresión bastante aproximada de la severidad con la que los ordenamientos tratan esta forma de delincuencia centrando la atención en tres tipos específicos compartidos: la del delito sexual más grave que recoge cada Código en su forma básica (sin agravantes específicos), la de dicho delito con la agravante compartida por los tres Códigos de comisión grupal, y la de un delito preparatorio con relación a víctimas menores (*child grooming*).

Como se puede observar en estos ejemplos, en los tres ordenamientos se opta por un uso casi exclusivo de la pena privativa de libertad (sólo en el último ejemplo el Código Penal español prevé la pena de multa como alternativa a la prisión, pero también con un rigor alto -de 12 a 24 meses-), y además con una intensidad razonablemente similar (incluso en el caso griego, que tiene un sistema más abierto de codificación de las escalas penales, se aprecia que el reproche penal que se realiza a estos delitos es muy parecido: en general, el delito sexual más grave tiene asociada una pena de entre 6 y 12 años de prisión, el delito sexual cometido en grupo se castiga con una pena de prisión de entre 8 y 15 años, y el delito de *child grooming* se mueve entre las penas de 1 y 3 años de prisión).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, en el contexto de los delitos sexuales, los distintos ordenamientos prevén otras penas/medidas de seguridad adicionales que pueden ser impuestas junto con las penas privativas de libertad y que, de manera general, tienen relación con el tipo de delito cometido y pretenden evitar la reincidencia en el mismo. Ejemplos claros son las penas accesorias previstas en los arts. 600-septies.2 y 609-nonies CP italiano, que son variables y tienen estrecha relación con la conducta típica concretamente realizada (por ejemplo, se prevé en ambos la pérdida de la “responsabilità genitoriale” cuando en el delito cometido la característica paternal del autor sea uno de sus elementos constitutivos o una circunstancia agravante), así como la medida de seguridad no privativa de libertad y de ejecución posterior al cumplimiento de la pena prevista en el último párrafo del art. 609-nonies CP italiano (y que toma distintas formas: prohibiciones de acercamiento, de cambio de domicilio sin previo aviso,...).

De manera muy similar, el legislador español prevé para estos supuestos la imposición de diversas penas accesorias a la de prisión (de forma general en los arts. 54 a 57 CP español, y de manera más específica en el art. 192.3 CP español, que hasta el Proyecto de LOGILS permite (el proyecto prevé que la imposición sea *preceptiva*²⁸) en ciertos casos imponer, por ejemplo, la privación de la patria potestad o la inhabilitación para el desempeño de ciertos empleos), así como la posibilidad de aplicación de una medida de seguridad no privativa de libertad de cumplimiento posterior a la pena (arts. 106 y 192.1 CP español), que puede adoptar distintas formas (obligación de estar localizable, de comunicar los cambios de residencia o de trabajo, de aproximarse a/comunicarse con la víctima,...).

2.4. Consideración de los delitos sexuales como delitos públicos o privados

Una cuestión especialmente relevante en la práctica con relación a estos delitos es su consideración o no como delitos públicos. Aunque se trata de una categorización que se encuentra a caballo entre lo procesal y lo material, lo cierto es que saber en manos de quién se encuentra la iniciativa procedimental en estos casos es también un signo acerca de la perspectiva del ordenamiento en este asunto, así como de una mayor o menor consideración con las potenciales víctimas. En general, en los tres ordenamientos estudiados los delitos sexuales se configuran como una especie de categoría intermedia entre los delitos públicos (es decir, aquellos que se persiguen de oficio, sin necesidad de ninguna intervención de la víctima) y los delitos privados (aquellos que se persiguen sólo a instancias de la víctima), aunque con una prevalencia del primer carácter. Esta opción intermedia²⁹ tiene como objetivo final la evitación, en la mayor medida posible, de la revictimización, dejando un espacio para que la víctima tenga cierta capacidad de decisión sobre el proceso (saber si quiere iniciar el proceso, a pesar de los perjuicios a sus intereses que pueden surgir durante el mismo -en términos de intimidad, de rememoración de los hechos,...-, o si prefiere no asumir la carga del proceso y no perseguir el delito), pero sin dejar de mostrar un interés público en la efectiva represión de estos delitos.

El caso español es quizás el más tendente hacia la consideración de los delitos sexuales como públicos. En general, son todos considerados de esta manera, con un pe-

²⁸ El Proyecto de LOGILS prevé que (l)a autoridad judicial impondrá a las personas responsables de la comisión de algún delito de agresión sexual (...) cuando la víctima sea menor de edad (...) *la pena de privación de la patria potestad o de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento*. Y que a las personas responsables del resto de delitos del Título relativo a los derechos contra la libertad sexual, se les podrá imponer razonadamente, además de las penas señaladas para tales delitos, la pena de privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento (...), así como la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no (...).

²⁹ SPOHN, C., RODRIGUEZ, N., & KOSS, M., “The ‘victim declined to prosecute’: Accounting for lack of cooperation in sexual assault cases”, Paper presented at the annual meeting of the American Society of Criminology, St. Louis, MO, November, 2008.

queño matiz recogido en el art. 191.1 CP español³⁰. En este precepto se establece que la persecución de los delitos sexuales cometidos sobre mayores de edad puede realizarse a instancia exclusiva del Ministerio Fiscal, pero exigiendo a este que actúe “ponderando los legítimos intereses en presencia”, lo cual parece ser una apertura, entre otras cuestiones, hacia las circunstancias que pueda manifestar la propia víctima. En todo caso, ese mismo precepto convierte en delitos totalmente públicos aquellos que se cometan sobre menores de edad, personas con discapacidad necesitada de especial protección y personas desvalidas. Por otra parte, y en todos los casos, el art. 191.2 CP español deja claro que, una vez que la persecución penal del delito se ha iniciado, la intervención posterior de la víctima en otro sentido no tiene efectos ni para paralizar el proceso ni para extinguir la responsabilidad penal del autor.

Los ordenamientos italiano y griego optan por una consideración general de los delitos sexuales como delitos privados, donde la iniciativa de la víctima es central para la persecución de estos. Sin embargo, en ambos casos hay delitos sexuales considerados como públicos por su especial gravedad (en el caso griego, *rape or sexual abuse by a prison or police officer, educator*, etc.; en el caso italiano, por ejemplo, los delitos cometidos sobre un menor de edad o por un *ancestor, parent, guardian*, etc. -art. 609-septies CP italiano-). La mayor diferencia entre estos dos ordenamientos radica en la eficacia de una intervención de la víctima posterior al inicio del procedimiento: en el caso italiano, la querella impuesta es irrevocable, por lo que esa segunda intervención ya no tendría efectos jurídicos; en el caso griego, sin embargo, si la víctima decide que no quiere seguir adelante con la persecución del delito, el procedimiento puede darse por finalizado.

3. DATOS Y PERFIL

3.1. La importancia de los datos

Un elemento esencial a la hora de diseñar e implementar políticas públicas en materia de derechos de víctimas reside³¹ en los datos estadísticos; las políticas públicas deben sustentarse en datos objetivos y no en percepciones. La recopilación de datos debe ser sistemática, periódica y adecuada. De ahí la importancia de los estudios cuantitativos y cualitativos. La VRD prevé que los EEMM envíen a la Comisión los datos estadísticos relativos a las víctimas de delitos y, entre ellas, las víctimas de delitos sexuales. De hecho, el legislador europeo recoge incluso una relación de los indicadores que los EEMM deben recoger para su posterior integración comparada en los correspondientes informes. En esa enumeración, la Comisión parece implícitamente diferenciar entre unos *datos mínimos*³² que deben recogerse y enviarse en todo caso, y otros datos que también son

³⁰ El Proyecto de LOGILS prevé suprimir consecuentemente con el núcleo de la derogada distinción entre agresión y abuso sexual, la mención que hacía a los abusos sexuales.

³¹ Vid. considerando 64 de la VRD.

³² Los datos estadísticos mínimos son: el número y el tipo de delitos denunciados.

importantes pero secundarios³³ que sólo se enviarán si el EM dispone de ellos. A través de esa relación de datos secundarios, la VRD sugiere de alguna manera a los EEMM que introduzcan, desarrollen y, en su caso, mejoren los sistemas de recopilación de datos estadísticos oficiales sobre el funcionamiento de sus sistemas de justicia penal.

En el caso de víctimas de delitos sexuales, los tres informes nacionales RE-TREAT³⁴ revelan, sin embargo, una importante disparidad en el grado de desarrollo de los datos oficiales. Mientras España e Italia cuentan con informes oficiales, públicos, periódicos, más o menos completos en la materia, en Grecia los datos oficiales son escasos e incompletos.

En España, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Estadística publican periódicamente los datos más importantes sobre delitos sexuales. Una información indudablemente importante y valiosa, pero genérica. Por eso, cualquier información más detallada exige descender a las decisiones y/o expedientes judiciales; estudios de campo que con un elevado coste en tiempo y esfuerzo en ocasiones afrontan algunos investigadores, a título individual o colectivo, al hilo de algún proyecto de investigación.

En Italia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia recogen un variado número de parámetros sobre delitos sexuales; datos que más tarde son analizados y publicados con una periodicidad normalmente anual por el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT).

El Estado heleno está tratando de resolver el déficit de información estadística que, según explica, responde a lagunas en la legislación, lagunas e insuficiencias en el sistema de registro de la policía y de los órganos judiciales, así como en un intercambio periódico y sistemático de datos entre Policía y Justicia, etc., y que a la postre desemboca en datos fragmentados, tanto objetiva, como temporalmente. La búsqueda de información obliga en muchas ocasiones a acudir a los expedientes físicos, por falta de programas informáticos de gestión procesal. Subsanan estos problemas es una de las prioridades del Instituto Europeo para la Igualdad de Género adscrito a la Secretaría General de Política de la Familia e Igualdad de Género. Y, entre 2019-2020, se han observado algunos pequeños avances en la unificación de los datos. Con todo, puede obtenerse una panorámica a partir de las bases de datos legales “Nomos” e “Isokratis”, la información de la Secretaría General de Política Familiar e Igualdad de Género y, en especial, de otras organizaciones europeas como *Eurostat* y el *Instituto Europeo para la Igualdad de Género* (EIGE).

En definitiva, la recopilación de datos del sector de la justicia constituye un caballo de batalla en Grecia, mientras que en España e Italia la información estadística

³³ Los datos que también deberían enviarse, pero que dependerá de que cada EM disponga de ellos, son datos judiciales y policiales; datos de justicia restaurativa; y otros recopilados por servicios sanitarios, sociales y de apoyo a víctimas. Véase, entre otros: el número, la edad y el sexo de las víctimas; el número de delitos denunciados; el número de casos investigados, el número de procesados, el número de condenados; los datos sobre la manera en que las víctimas utilizan los servicios facilitados por organismos públicos y las organizaciones públicas y privadas de apoyo, así como el número de derivaciones de víctimas por parte de la policía a los servicios de apoyo, el número de víctimas que solicitan apoyo y que reciben o no el mismo o justicia restaurativa.

³⁴ Vid. informes nacionales de RE-TREAT (español, griego e italiano).

oficial en materia de justicia es periódica y podría decirse que está consolidada a día de hoy, aunque siempre es mejorable³⁵. Por tanto, España e Italia cuentan con datos oficiales, pero en muchos casos las estadísticas son excesivamente genéricas o generalistas, no descienden a detalles que pueden ser muy interesantes desde el prisma de la política legislativa. Por eso, cualquier detalle o información complementaria sólo es posible gracias al esfuerzo individual y colectivo de investigadores en la materia que a propósito de algún *paper* o proyecto afrontan estudios empíricos más específicos a partir de muestras cuantitativas y cualitativas.

3.2. Una panorámica de los delitos sexuales en España, Grecia e Italia en cifras

A partir de la información disponible en EUROSTAT podemos obtener una visión general de los delitos sexuales en España, Grecia e Italia. Para ello, analizamos las cifras relacionadas con delitos sexuales, según los parámetros que recoge la oficina de estadísticas europea. En primer lugar, el tipo de delito: violencia sexual en general y, en particular, agresión sexual o violación. El estatus procesal y el género de las personas implicadas en el delito; por un lado, las víctimas y, por otro lado, el sujeto pasivo: investigado, procesado, condenado. En último lugar, las personas privadas de libertad por este tipo de delitos. El periodo de estudio comprende la década 2008-2018.

La lectura comparada de los datos, como se explicará a continuación, debe hacerse con mucha precaución; resulta muy complejo extraer conclusiones. No obstante, sí ofrecen una panorámica que puede complementar algunos resultados de la investigación. EUROSTAT publica unas fichas con la finalidad de que los EEMM conozcan qué datos deben incluirse en cada categoría; en lo que aquí importa: violencia sexual³⁶,

³⁵ En el mismo sentido, Recomendación de GREVIO, Comité de las Partes a Italia y España sobre la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Véase respectivamente, en el caso de Italia, IC-CP/Inf(2020)2, Italia, 30 de enero de 2020, en particular el punto 9, p. 4 (Informe de base sobre Italia, par. 79). En el caso de España, IC-CP/Inf(2020)10, España, 15 de diciembre de 2020, en particular, punto 8, pp. 3-4 (Informe de base sobre España par. 57 y 63).

³⁶ La ficha EUROSTAT relativa a la categoría “violencia sexual” (*sexual violence*) es en principio un parámetro genérico (incluida la violación y agresión sexual, es decir, *rape and sexual assault*). Y en particular, como cualquier “acto sexual no deseado, intento de obtener un acto sexual, o contacto o comunicación con atención sexual no deseada sin consentimiento válido o con consentimiento como resultado de intimidación, fuerza, fraude, coerción, amenaza, engaño, uso de drogas o alcohol, o abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad. Debe excluir los actos de abuso de una posición de vulnerabilidad, poder o confianza, o el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza, para obtener ganancias monetarias, sociales o políticas de la prostitución o los actos sexuales de una persona, la coacción, los delitos de prostitución, los delitos de pornografía y otros actos contra el orden público normas sexuales como el incesto no constitutivo de violación y exhibicionismo, agresiones y amenazas, esclavitud y explotación no constitutiva de actos lesivos de carácter sexual, TiP (trata de seres humanos) con fines de explotación sexual, acoso y acecho” (la traducción de la ficha en inglés al español es nuestra).

violación³⁷ y agresión sexual³⁸. Con todo, luego cada EM puede complementar con una explicación la información al respecto. España en este caso señala que bajo la etiqueta violencia sexual computa todos los delitos sexuales, incluso los cometidos sin violencia. Grecia advierte en la categoría violaciones no computa las tentativas. Italia, por su parte, señaló a la oficina europea que en la legislación italiana que dentro de la violencia sexual no diferencia de forma separada la violación, ni la agresión sexual³⁹.

A. Tipo de delito

El número de delitos sexuales denunciados (según datos de la policía) en estos tres países es muy irregular. En el caso de la violencia sexual en general, la media de casos denunciados es de 521 en Grecia, 4.794 en Italia y 9.427 en España.

Tabla de elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por EUROSTAT.

Datos policiales	Delito	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Media
Grecia	Violencia sexual	924	511	435	486	468	466	554	493	453	423	521
	Violación	213	215	172	167	149	134	122	155	156	157	164
	Agresión sexual	711	187	180	203	187	191	259	263	224	182	259
España	Violencia sexual	9.723	9.954	9.892	9.008	8.923	9.468	7.496	8.726	9.464	11.612	9.427
	Violación	2.051	1.578	1.513	1.280	1.298	1.239	1.229	1.249	1.387	1.700	1.452
	Agresión sexual	7.672	8.376	8.379	7.728	7.625	8.229	6.267	7.477	8.077	9.912	7.974
Italia	Violencia sexual					4.488	4.754	4.511	4.513	5.115	5.381	4.794
	Violación											
	Agresión sexual	4.963	4.813	4.617	4.689	4.488	4.257	4.000				4.547

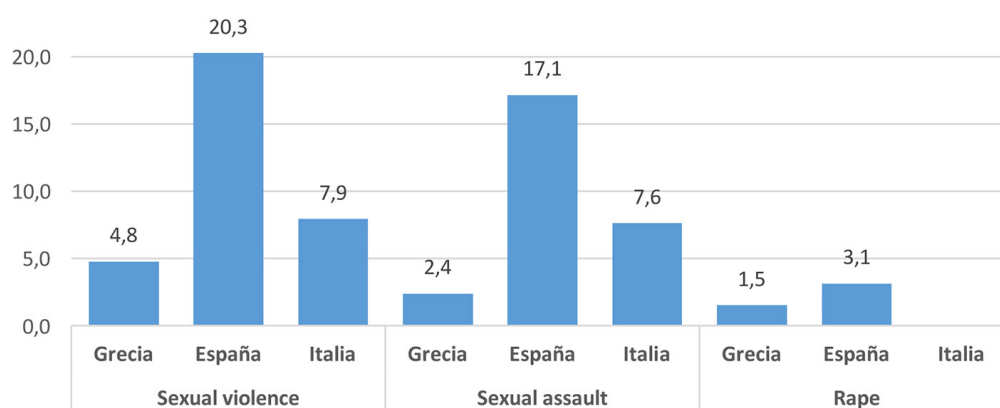
³⁷ La ficha EUROSTAT que se refiere a la violación (rape), la define como la penetración sexual sin consentimiento válido o con consentimiento como resultado de intimidación, fuerza, fraude, coacción, amenaza, engaño, uso de drogas o alcohol, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad, o la entrega o recepción de beneficios.

³⁸ Y la agresión sexual (sexual assault) como la violencia sexual que no equivale a violación. Incluye un acto sexual no deseado, un intento de obtener un acto sexual o contacto o comunicación con atención sexual no deseada que no equivale a violación. También incluye agresión sexual con o sin contacto físico, incluida la agresión sexual facilitada por drogas, la agresión sexual cometida contra una pareja en contra de su voluntad, la agresión sexual contra una persona indefensa, manoseos o caricias no deseados, acoso y amenazas de naturaleza sexual (la traducción de la ficha en inglés al español es nuestra).

³⁹ Algo contradictorio con los datos que ofrece porque algunos años 2013-2014 y 2018 si parecen recogerse de forma diferenciada.

Por tanto, la media de casos denunciados en España es el doble que en Italia y 18 veces superior a los denunciados en Grecia. En el caso de las agresiones sexuales, los valores medios de casos denunciados son 259 en Grecia, 4.547 en Italia y 7.974 en España. De nuevo, vemos que en España se denuncian el doble de agresiones sexuales que en Italia y 30 veces más que en Grecia.

Tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes. Gráfico de elaboración propia. Fuente datos ofrecidos por EUROSTAT.



Por último, en el caso de las violaciones, en España la media de casos denunciados es de 1.452 frente a 164 en Grecia, lo que implica que hay casi 9 veces más denuncias en España que en Grecia. Nótese que, según los datos de EUROSTAT, Italia no desglosa las denuncias específicamente por violación.

Para poder comparar estas cifras de forma más fiable, es necesario tener en cuenta el tamaño de la población de cada país. Por este motivo, el gráfico *supra* muestra los valores medios de las tasas de este tipo de delitos por cada 100.000 habitantes.

De los resultados pueden hacerse lecturas muy diferentes. Una impresión rápida y a nuestro juicio equivocada sería pensar en España y en Italia se cometan más delitos de carácter sexual que en Grecia. Sin embargo, una interpretación más pausada iría en otra dirección: las víctimas de delitos sexuales denuncian quizá más en España y en Italia, es decir, que la cifra negra de estos delitos que permanecen ocultos es más elevada en Grecia. En la tasa de denuncia influyen, entre otros factores: la concienciación social frente a este tipo de delitos, la confianza (al menos a priori) en el sistema de justicia penal, etc. No obstante, las posibilidades anterior deberían contrastarse con las tasas dependiendo de la población en cada uno de los tres países.

B. Sujetos y estatus procesal

De nuevo observamos una gran irregularidad en las cifras registradas en EUROSTAT por estos tres países entre 2008-2018, contradicciones internas lo que revela déficits de homogeneidad en la categorización y el cómputo de los datos.

En el caso de las *agresiones sexuales*, Grecia no desglosa la información; tampoco ninguno de los tres países examinados ofrece información sobre las personas “procesadas”; y, de los tres EEMM sólo España recoge la información sobre condenados.

La información relativa a *violaciones* tampoco es mejor; Italia no ofrece información sobre las personas investigadas; tampoco España y Grecia, de los procesados; ni Grecia, de los condenados; o, incluso Italia de las víctimas.

No obstante, a continuación, trataremos de ofrecer una panorámica de la información que ofrece EUROSTAT.

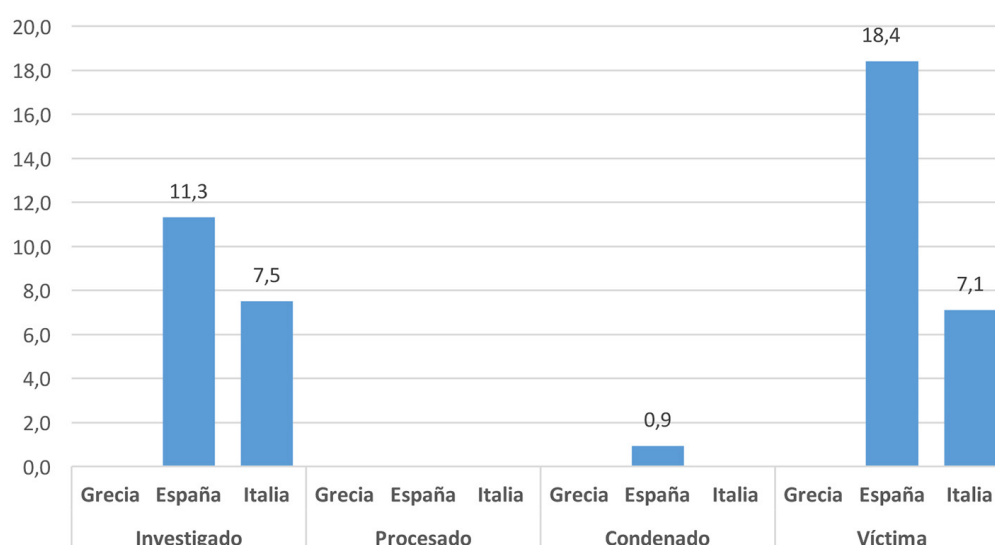
B.1. Agresiones sexuales

Centrándonos en las víctimas que denuncian agresiones sexuales, el número medio de víctimas entre 2008-2018 fue de 8.555 en España (siendo la inmensa mayoría de víctimas mujeres, el 84% de los casos) frente a 4.230 en Italia (donde el 91% eran víctimas mujeres). En cuanto a las personas investigadas en la década 2008-2018, el número medio es de 5.261 en España (hombres en el 92% de los casos) frente a 4.472 en Italia (en donde en el 98% de los casos el supuesto agresor era un hombre).

De nuevo, para poder comparar estas cifras de una manera más adecuada, es necesario tener en cuenta el tamaño de la población en cada uno de estos países. Así, el siguiente gráfico muestra los valores medios de las tasas de agresiones sexuales por cada 100.000 habitantes, según el estatus procesal del sujeto pasivo del proceso penal, así como las víctimas del delito.

En primer lugar, se observa que las tasas relativas a las víctimas son superiores a los investigados. Como ya se ha comentado, no se dispone de información sobre procesados, ni condenados casi en ninguno de los tres países (salvo España, en el caso de los con-

Sujetos y agresiones sexuales por 100.000 habitantes y estatus procesal. Tasa (media) 2008-2018. Gráfico de elaboración propia. Fuente datos ofrecidos por EUROSTAT.



denados). En segundo lugar, se confirma la tendencia mostrada por los valores absolutos, la tasa media anual por 100.000 habitantes de víctimas es superior en España que en Italia, más del doble para la tasa de víctimas y 1,5 veces para la tasa de investigados. Dejando a un lado la diferencia de las tasas de investigados y víctimas entre España e Italia, en general las cifras indicarían que un volumen importante de las agresiones sexuales no supera el trámite de la investigación preliminar. Detrás de ese dato pueden encontrarse distintos motivos, véase, entre otros: autor desconocido sin que las diligencias de identificación hayan ofrecido resultado alguno; teniendo en cuenta el carácter semipúblico de la mayoría de los delitos, el que la víctima no quiera continuar; etc.

B.2. Violaciones

La información disponible en EUROSTAT sobre las personas implicadas en *violaciones* es también extremadamente escasa e irregular. No obstante, de la información disponible resultaría que la media anual de víctimas que han denunciado una violación en España entre 2008-2018 es de 1.366 (mujeres en el 94% de los casos) frente a 210 denuncias que como media se han registrado en Grecia (mujeres en el 91% de los casos).

En cifras absolutas, el número anual de víctimas que denuncian en España violaciones es 6,5 veces superior al de Grecia. Esta información no está disponible para Italia. En España, la media de investigados por violación es de 1024 (la casi totalidad hombres, en el 98% de los casos) frente a 308 en Grecia (donde esa ratio desciende, pues son hombres en el 75% de los casos).

En cuanto a las personas procesadas, sólo Italia ofrece esta información, alcanzando un valor medio de 6.931; la distribución por género de los procesados por violación en Italia (hombres, en el 97% de los casos) es similar al de los investigados por el mismo delito en España.

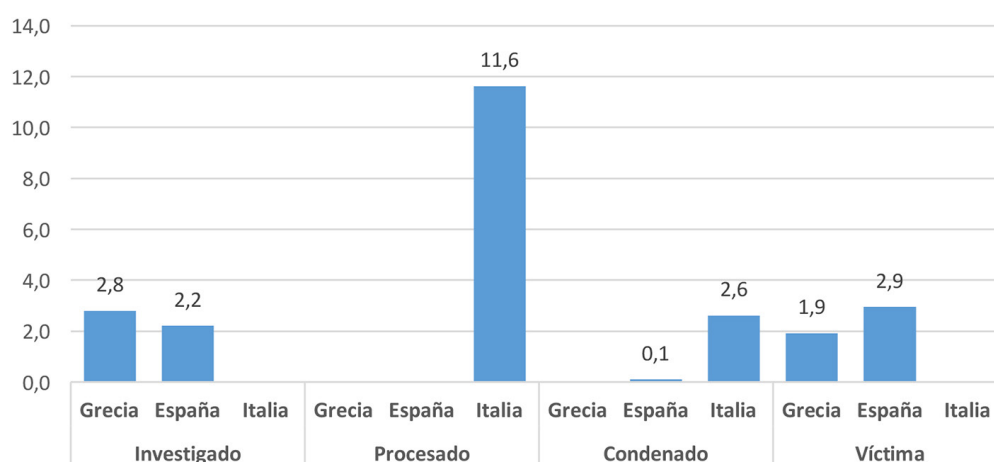
Sobre los condenados por violación (véase, la tabla *infra*) es preciso recordar que EUROSTAT ofrece muy pocos datos en la década 2008-2018. En España sólo se puede acceder a los datos de 2014-2018, mientras que Italia sí ofrece la serie completa hasta 2015. Dejando eso a un lado, sorprende comparativamente en principio número medio de condenados en España, 43 (100% hombres) frente a los 1.553 (99% hombres) de Italia; los datos italianos a nuestro juicio deberían valorarse con precaución porque podrían ser imprecisos y referirse no a violaciones en sentido estricto sino a “violencia sexual” en genérico; de hecho, unas de las precisiones que realizaba Italia a Eurostat era que no podía diferenciar la violación de la violencia sexual.

Tabla de elaboración propia. Fuente datos ofrecidos por EUROSTAT.

Condenados violación	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Media
Grecia												
España							64	40	52	25	35	43
Italia	1.359	2.102	1.540	1.516	1.501	1.501	1.582	1.325				1.553

Sea como fuera, para poder comparar estas cifras de una forma más adecuada, es necesario tener en cuenta el tamaño de la población en cada uno de estos países. Así, el siguiente gráfico muestra los valores medios de las tasas de violación por cada 100.000 habitantes, según el estatus procesal de las personas implicadas en el delito.

Sujetos y violaciones por 100.000 habitantes. Tasa (media anual). Gráfico de elaboración propia. Fuente datos ofrecidos por EUROSTAT.



Se observa que la tasa de investigados por violación es ligeramente superior en Grecia que en España, mientras que la tasa de víctimas es un punto superior en España que en Grecia. Por tanto, aunque proporcionalmente las víctimas de violación en Grecia denuncian menos que en España, por los mismos hechos se investiga proporcionalmente a más personas en Grecia que en España. A la vista de los problemas de homogeneidad de los datos y los déficits en su cómputo estos resultados no pueden considerarse concluyentes.

C. Personas privadas de libertad

En el caso de las agresiones sexuales, la media de presos es de 150 (99% hombres) en Grecia, 640 (92% hombres) en Italia y 1.284 (97% hombres) en España. Al comparar estas cifras, se observa que en términos absolutos, en España el número de personas encarceladas por agresión sexual duplica al de Italia y es 8,5 veces superior al de Grecia.

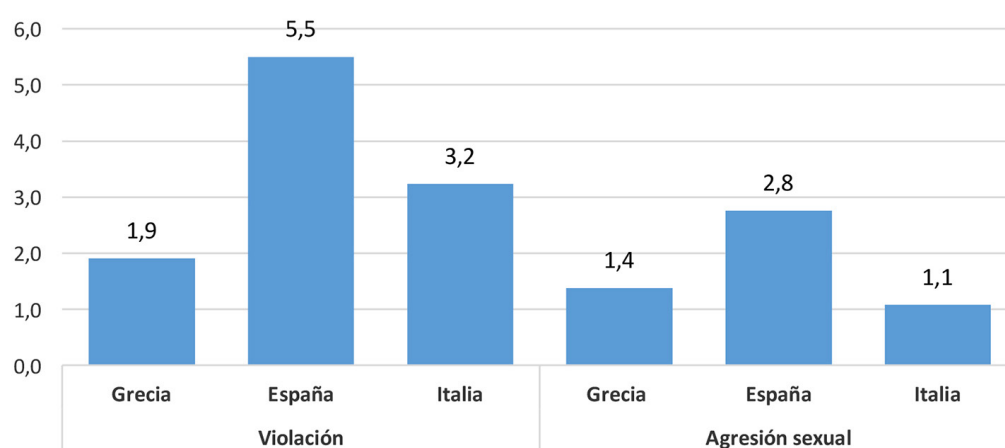
Tabla de elaboración propia. Fuente datos ofrecidos por EUROSTAT.

Presos por delito		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Media
Grecia	Agresión sexual	93	104	113	59	168	118	174	136	208	273	206	150
	Violación	202	216	220	207	177	179	201	139	171	307	281	209
España	Agresión sexual	1.160	1.252	1.268	1.246	1.030	1.068	1.260	957	1.448	1.564	1.869	1.284
	Violación	2.275	2.449	2.472	2.359	2.217	2.168	2.127	2.248	3.225	3.278	3.313	2.557
Italia	Agresión sexual	560	603	662	674	666	672	645					640
	Violación	1.667	1.866	1.952	2.034	2.052	1.973	1.922					1.924

En el caso de la violación, la media de presos es de 209 (98% hombres) en Grecia, 1.924 (99% hombres) en Italia y 2.557 (98% hombres) en España. Al comparar los tres países, se deduce que la media de personas encarceladas por violación en España es 1,3 veces superior a la de Italia y 12 veces superior a la de Grecia.

No obstante, las cifras deben compararse teniendo en cuenta el tamaño de la población en cada uno de estos países.

Tasa de encarcelados por 100.000 habitantes. Gráfico de elaboración propia. Fuente datos ofrecidos por EUROSTAT.



El gráfico anterior muestra los valores medios de las tasas de prisión por cada 100.000 habitantes. En general, observamos que en los tres países la tasa de presos por violación es superior al de presos por agresión sexual. Por último, comparando los tres países, se confirma la tendencia observada en las cifras absolutas, proporcionalmente hay más presos en España por cualquiera de estos delitos que en Italia o en Grecia; Grecia tiene proporcionalmente más presos por agresión sexual que Italia. Las tasas en España superiores a las de Italia (en 1,7 puntos para las agresiones sexuales y en 2,3 puntos para las violaciones) y superiores a las de Grecia (en 1,4 para las agresiones sexuales y en 3,6 para las violaciones).

4. TEORÍA Y PRÁCTICA EN EL TRATAMIENTO DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CRIMINAL GRIEGO, ITALIANO Y ESPAÑOL: UNA MIRADA AL HILO DE LA DIRECTIVA

En general, los tres EEMM objeto de este estudio no tienen un proceso penal específico o *ad hoc* para los delitos sexuales. El curso procedimental que siguen los delitos sexuales depende en general de los mismos criterios que determinan el curso procedimental de cualquier otro delito. No obstante, los tres EEMM prevén algunas *especialidades* en la forma en que se desenvuelven algunos trámites de los procedimientos penales por delito sexual. De hecho, los tres informes nacionales RE-TREAT revelan que la

preocupación en esta materia ha desembocado en los últimos años en algunas reformas legales expresas⁴⁰, políticas legislativas⁴¹ y, otras iniciativas públicas y/o privadas. Todas ellas interesantes en aras de mejorar el tratamiento que el SJC dispensa a las víctimas de delitos sexuales. Sin embargo, en la práctica, el impacto efectivo de tales reformas es todavía muy reducido, especialmente de los tres países objeto de estudio en Grecia.

Dejando a un lado lo anterior, los motivos detrás de esa reducida efectividad en los tres EEMM son diversos, pero algunas “circunstancias” parecen repetirse en los tres EEMM, aunque a veces varía dependiendo del sector concreto y, en cualquier caso, hay que reconocer que la intensidad de este problema varía de un país a otro e incluso dentro del mismo territorio nacional. Así, resulta, que en muchas ocasiones la regulación existe, ya sea una norma legal expresa (*hard law*) o un protocolo (*soft law*), pero no se cumple por desconocimiento de los operadores, por falta de medios personales y materiales, etc.

Si de algo se preocupa la VRD es de establecer y/o reforzar un marco común mínimo de derechos, apoyo y protección a víctimas en los EEMM. Un marco legal al que tienen derecho las víctimas y que obliga a las autoridades, operadores jurídicos y no jurídicos que entran en contacto con víctimas. En cualquiera de los escenarios, proceso penal, servicios de apoyo o justicia reparadora, la VRD persigue evitar y, en su caso, proteger a las víctimas de delitos frente a la victimización secundaria y reiterada.

4.1. Información y apoyo

A continuación, analizaremos cómo se ha implantado en los tres países las indicaciones de la VRD a la hora de dar información y apoyo a las víctimas de violencia sexual⁴² (vid. capítulo 2, arts. 3-9).

⁴⁰ Por ejemplo, en Italia: la Ley 69/2019, de 19 de julio, conocida como Código Rojo, que tiene como objetivo aumentar la eficacia de las respuestas judiciales a la violencia contra las mujeres y mejorar la protección de las víctimas; la Ley 119/2013, de 15 de octubre, que reconoció el deber de las autoridades de apoyar y promover una amplia red de servicios de apoyo a las víctimas; o la Ley 38/2009, de 23 de abril, de acoso. En España: Proyecto de Ley Orgánica para la garantía integral de la libertad sexual. 2020. Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género; Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima. Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015. En Grecia: Ley 4604/2019 destinada a potenciar la igualdad de género; Ley 4531/2018 que incorporó un importante número de directrices y medidas hacia la Violencia Doméstica en el orden de los derechos de las víctimas y la maximización del bienestar, incluyendo la protección de la victimización secundaria por parte del sistema de justicia penal. Ley 3216/2013 sobre trata de personas; Ley 3896/2010 sobre acoso sexual en el ámbito laboral.

⁴¹ Entre otros, la Estrategia nacional italiana contra la violencia de género o el Tercer plan de acción nacional italiano de 2017 a 2020. En marzo de 2021, el Gobierno español (Delegación de Violencia de Género) amplía la línea telefónica española (016) de apoyo, que antes se limitaba a la violencia de género en la pareja o expareja, a todas las formas de violencia de género según la definición del Convenio de Estambul. Programa Nacional Griego para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres, como parte del Plan de Acción Nacional para la Igualdad de Género 2016-2020.

⁴² Deficiencias del sistema de justicia criminal en respuesta a la violencia sexual, BUTT, D., “We are failing the community of sexual assault victims”, *The Globe and Mail*, 2017. JORDAN, J. “Justice for rape victims?”

A. El derecho a entender y ser entendido/a

La VRD señala la necesidad de que los EEMM adopten las medidas adecuadas para ayudar a las víctimas para que *entiendan y puedan ser entendidas* a lo largo del proceso penal. La información debe darse desde su primer contacto con la autoridad competente para que puedan acceder al ejercicio de sus derechos. Además, se subraya que, para garantizar la comunicación adecuada, se preste especial *atención a las características personales* de la víctima (p. ej., diversidad funcional).

La información debe darse de forma efectiva; es decir, garantizando que el contenido “llegue efectivamente” a la víctima, debiendo olvidarse la utilización de recursos puramente formales. Por tanto, *informar* no puede consistir en un mero trámite formal, sino que debe ser material en el sentido de que la víctima entienda el contenido y el alcance de la información facilitada.

A pesar del progreso realizado en los últimos años y el interés de los diferentes operadores (policía, jueces, fiscales, abogados, etc.) por comunicar de una manera entendible la dinámica del proceso penal, este sigue siendo un aspecto que necesita ser mejorado. De hecho, las víctimas entrevistadas (ES-GR) expresan de manera consistente confusión, falta de entendimiento y gran incertidumbre durante la evolución del proceso penal. Por ello, es necesario mejorar las técnicas y los instrumentos de comunicación que se emplean en las distintas fases del proceso.

Muy probablemente, esta falta de comunicación fluida se deriva de la *carencia* –subrayada tanto por los profesionales entrevistados (ES-GR-IT) como por las víctimas (ES-GR)– de *suficiente especialización de los operadores* implicados en los procesos penales de violencia sexual. Tanto las víctimas como los profesionales de distintos colectivos entrevistados en el marco de los informes nacionales subrayan la necesidad de una formación especializada centrada en los intereses de la víctima, en donde se desechen prejuicios asociados a este tipo de delitos y, además, se produzca una mayor agilización en la gestión de los casos.

B. El derecho a ser acompañada

La VRD también recoge que, cuando sea viable, se permita que la víctima vaya *acompañada* de una persona de su elección en diferentes momentos del proceso.

En ES, en la práctica, se designa una persona que *asiste* a la víctima, que tendrá su nombre y teléfono; pero en lo que ahora importa se permite que las víctimas puedan estar acompañadas o estar solas si así lo prefieren. No obstante, un problema es la confusión entre el acompañamiento y la asistencia a las víctimas. Dejando a un lado lo anterior, en los delitos intrafamiliares, cuando la víctima es menor de edad⁴³, o cuando tiene

The spirit may sound willing but the flesh remains weak”, in *Crime, victims and policy*, London, Palgrave Macmillan, 2015, pp. 84-106. DOE, J. *The Story of Jane Doe: A book about rape*. Toronto, Vintage Canada. 2004.

⁴³ Las policías entrevistadas perciben que las jóvenes o menores de edad prefieren estar solas que describir cuestiones íntimas delante de sus padres o familiares. Sin embargo, en el caso de víctima menor de edad

discapacidad intelectual o trastorno generalizado del desarrollo, la persona de confianza de la víctima puede no ser bien aceptada por los operadores jurídicos. Esta cuestión lleva a plantear si la correcta aplicación de la figura del defensor judicial reconocido en el art. 26.2 de la Ley 4/2015, de 27 abril, del Estatuto de la víctima del delito (en adelante, LEVID), permitiría discernir cuándo la víctima menor de edad prefiere estar sola y cuándo el acompañamiento por parte de los progenitores o responsables puede no ser el que satisfaga los intereses de la víctima (arts. 8 y 24.1.c VRD). Por otro lado, algunas entidades (p.ej., asociaciones, ONGs, etc.) acompañan a la víctima a lo largo del proceso penal, pero no siempre pueden garantizar ese acompañamiento durante todo el proceso porque a veces se prolongan más que la duración de los contratos o convenios que mantienen con la Administración pública (esas organizaciones suelen financiarse a través de subvenciones y contratos con las administraciones públicas). Sin embargo, una opinión unánime entre todos los profesionales entrevistados en ES, es que en el momento de la declaración de la víctima en la instrucción, a pesar de que la LEVID lo prevé, en la práctica desgraciadamente no se suele permitir que la víctima declare junto a la persona que ella desee, sustituyéndola por una profesional de la Oficina de Asistencia a las Víctimas.

Los fiscales IT señalan que la víctima puede pedir ser acompañada por su abogado/a, o por una persona de su confianza, a no ser que esa persona tenga información sobre los hechos, o pudiera ser un potencial testigo en el caso. Además, si la víctima es especialmente vulnerable o un/a menor, podría ser acompañada por una psicóloga o psicólogo. Incluso, si el/la juez lo solicita o lo admite, se prevé la asistencia afectiva de las personas indicadas por el propio menor.

En Grecia, cuando la víctima es un/a menor suele acudir acompañada de uno de los progenitores o por un/a abuelo o abuela, y los abogados entrevistados manifiestan actuar de manera diferente: uno de ellos mantiene el encuentro con el/la menor en presencia del adulto que le acompaña, mientras que el otro habla en privado con la víctima. Uno de los policías, en aras de mantener la confidencialidad, pregunta al menor a solas, mientras que el otro policía y la psicóloga infantil subrayan que han de informar a los padres, con independencia de la privacidad de la víctima. Cuando el supuesto agresor o abusador es uno de los progenitores, la policía y la psicóloga infantil informan al otro progenitor. Además, cuando la víctima es un/a adolescente, la psicóloga le anima a que sea él/ella (víctima) quien le relate a los padres, o junto con ella (psicóloga), lo sucedido.

Respecto a la opinión de las víctimas sobre ese acompañamiento, nótese que sólo tenemos datos en ES; las víctimas entrevistadas en valoraron muy negativamente el apoyo y el acompañamiento recibido a lo largo del proceso penal, pues rara vez procede de los operadores jurídicos o de la estructura del propio proceso, sino que en muchas ocasiones tiene que proceder del entorno de la víctima. El problema es que normalmente la persona del entorno que acompaña a la víctima tampoco está familiarizada con el proceso penal y, al final, la víctima se siente fuera del sistema o pérdida en él. Las víctimas

algunos profesionales exigen necesariamente que en la exploración esté presente o disponible una persona de la confianza de la víctima menor de edad porque de lo contrario no se realiza la exploración.

echan en falta un acompañamiento profesional, pero en cambio la Directiva prevé que sea ella quien decida quien le acompaña. Esta situación refleja un claro alejamiento de los intereses y bienestar de las víctimas. Máxime si tenemos en cuenta que la víctima de un delito sexual no siempre cuenta con el apoyo del entorno más cercano. La ausencia de ese apoyo tiene un impacto dramático en ellas. De hecho, las víctimas⁴⁴ entrevistadas en ES que no han recibido apoyo, o han recibido un apoyo muy escaso, ya sea de su entorno familiar y/o de la administración u otras instancias, manifiestan haber tenido pensamientos suicidas en algún momento.

C. Los derechos a recibir información: desde el primer contacto con una autoridad competente y sobre su causa

La VRD detalla de forma completa los diferentes tipos de información (servicios de apoyo, interposición de denuncia, protección, asesoramiento jurídico, indemnizaciones, interpretación y traducción, reclamaciones, comunicaciones, justicia reparadora, reembolso de gastos, lugar y hora del juicio, sentencia, motivos de las decisiones judiciales, y puesta en libertad o fuga de la persona privada de libertad) que tiene derecho a conocer la víctima en los distintos momentos del proceso (arts. 4 y 6).

Respecto a esta cuestión parece existir una gran disparidad entre la forma en que los profesionales dicen proceder en los tres EEMM⁴⁵ y la opinión de primera mano de las víctimas entrevistadas en España (informe nacional español RETREAT).

Mientras que en IT los profesionales entrevistados afirman que se proporciona todo tipo de información relevante para la víctima (derechos, posibilidad de indemnización, pasos a seguir, servicios especializados de apoyo, etc.), en Grecia hay diversidad de opiniones según el tipo de profesional. En concreto, los policías indican que en los organismos públicos no está claramente establecida una persona de referencia que facilite la información pertinente sobre el proceso a la víctima, y depende de la buena voluntad del policía en particular el que la víctima reciba la información; en cambio, los abogados sí informan a las víctimas que representan de los derechos y servicios que tienen a su alcance; mientras que los profesionales de salud mental no se hacen cargo de este aspecto porque afirman que no es parte de sus funciones facilitar esa información a la víctima.

⁴⁴ El papel clave del apoyo o su falta, en VIDU, A., VALLS, R., PUIGVERT, L., MELGAR, P., JOANPERE, M., “Second Order of Sexual Harassment - SOSH”, *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 7(1), 2017, pp. 1-26. ORCHOWSKI, L. M., UNTIED, A. S., & GIDYCZ, C. A., “Social reactions to disclosure of sexual victimization and adjustment among survivors of sexual assault”, *Journal of Interpersonal Violence*, 28, 2013, pp. 2005-2023. AHRENS CE, STANSELL J, JENNINGS A. “To tell or not to tell: the impact of disclosure on sexual assault survivors’ recovery”, *Violence and Victims*, 2010; 25(5), pp. 631-48. STARZYNSKI, L. L., ULLMAN, S. E., FILIPAS, H. H., & TOWNSEND, S. M., “Correlates of women’s sexual assault disclosure to informal and formal support sources”, *Violence and Victims*, 20, 2005, pp. 417-432. FISHER, B. S., DAIGLE, L. E., CULLEN, F. T., & TURNER, M. G., “Reporting sexual victimization to the police and others: Results from a national level study of college women”, *Criminal Justice and Behavior*, 30, 2003, pp. 6-38.

⁴⁵ Para información más detallada, véanse los respectivos informes nacionales de RETREAT (español, griego e italiano).

En España, los profesionales entrevistados coinciden en que formalmente a las víctimas se les *satura de pliegos de información sobre derechos, pero desgraciadamente no conocen el contenido de sus derechos por diversas razones y circunstancias*. Por un lado, la persona que acaba de sufrir un ataque por un desconocido, no está en un estado físico y/o psicológico que le permita comprender el contenido de esa información. La situación cambia algo cuando el agresor es conocido y la víctima lleva mucho tiempo madurando la idea de denunciar porque normalmente se han acercado directa o indirecta ya a algún profesional del SCJ (abogado, un conocido, una asociación, un psicólogo, etc.). También influye la *cantidad y complejidad* de la información que reciben, la especialización técnica del proceso penal. La *celeridad* y el *apresuramiento* con que se desenvuelve todo al comienzo del procedimiento en la idea de que se pierde tiempo. Quizá deba valorarse invertir más tiempo y sosiego en esa información y, en otros trámites con la víctima, porque ese tiempo revierte positivamente en una víctima más fuerte. Por último, la *responsabilidad de informar* y la responsabilidad del *control-supervisión de la dación de esa información* de derechos juegan igualmente un papel esencial. A pesar de todo ello, los profesionales españoles, en la línea de los italianos, reconocen que se reduce a una comprobación formal: ¿se le ha informado? A lo que el funcionario responde “sí, si le hemos informado”. La información es más efectiva cuando la víctima está personada en el proceso como acusación particular y, por tanto, asistida por un letrado. Sin embargo, es habitual que las víctimas no se personen en el procedimiento como acusación particular precisamente porque los Juzgados no les informan debidamente de las implicaciones que ello conlleva, y en ocasiones esta posibilidad no es aprovechada por falta de medios⁴⁶.

En el caso de ES, donde sí se ha podido recabar información procedente de las propias víctimas, si éstas no están personadas como parte acusadora no reciben información actualizada sobre la marcha del procedimiento, ni sobre el acusado (p. ej., si está o no en prisión). En general, esa “desinformación” procesal les genera una gran inseguridad, además de incertidumbre; aunque el asesoramiento y apoyo legal mejora sensiblemente la opinión de las víctimas sobre esta cuestión. P.ej. cuatro de las seis víctimas entrevistadas reciben apoyo legal de una abogada del centro que se encarga de dar apoyo a las víctimas de violencia sexual en Madrid, y todas expresan su satisfacción con el trato y la información recibidos. Esta abogada les ha ido asesorando de manera puntual y comprensible a lo largo de las fases desarrolladas de su proceso penal en particular. Esta actuación profesional y especializada ha favorecido la comprensión del proceso y disminuido el grado de incertidumbre en las víctimas.

En definitiva, la experiencia práctica de los tres países demuestra que todavía existen grandes déficits en la denominada “Justicia Informativa”⁴⁷.

⁴⁶ SOLETO MUÑOZ, H. y GRANÉ CHÁVEZ, A., cifran en un 35% la personación de la acusación particular en Juzgado de lo Penal y del 63% en Audiencias provinciales.; algo que entienden en España perjudica a las víctimas porque según sus estudios de campo cuando hay acusación particular la cuantía de la pena es más alta, vid. *La eficacia de la reparación a la víctima en el proceso penal a través de las indemnizaciones*, ob. cit., pp. 91-94.

⁴⁷ Sobre el incumplimiento del derecho de la víctima a ser informada de una mujer con discapacidad intelectual víctima de una violación, vid. STEDH, de 19 de marzo de 2019, asunto E.B. c. Rumanía.

D. El derecho de las víctimas al tiempo de denunciar

El legislador europeo explicita que, cuando vayan a presentar la denuncia, las víctimas tienen derecho a: i) recibir una declaración por escrito que sirva como reconocimiento de denuncia formal; y, que cuando no entiendan o hablen la lengua de la autoridad competente, puedan, ii) denunciar en una lengua que entiendan o reciban la asistencia lingüística necesaria; y, previa solicitud, iii) recibir gratuitamente una traducción de la declaración por escrito de la denuncia en una lengua que entiendan.

Por tanto, el art. 5 VRD sólo hace referencia a aspectos *estrictamente formales* vinculados al trámite de la denuncia de la víctima. A este respecto, los tres informes nacionales RE-TREAT indican que las víctimas, después de denunciar, generalmente, reciben ese documento, y lo firman. Sin embargo, en este artículo no se recogen aspectos que tienen que ver con *cómo experimentan* las víctimas⁴⁸ esta fase inicial del proceso. Un punto en el que se produce un claro desencuentro entre la percepción de operadores policiales y la de las propias víctimas⁴⁹.

En Grecia, sólo una de las víctimas entrevistadas sufrió de violencia sexual siendo adulta y denunció ella misma. En este caso, le resultó muy desagradable la experiencia, ya que la toma de declaración en la policía fue larga y las preguntas se centraron en los detalles del suceso y en su relación con el agresor. Posteriormente, en el juicio, tuvo que testificar frente al acusado, y sintió miedo, indignación, e incluso culpabilidad, pues la trataron de una manera fría y distante. Hay que señalar que este caso sucedió hace más de 20 años y muy probablemente no sea representativo de cómo actualmente son tratadas las víctimas de violencia sexual en Grecia, pues todos los profesionales entrevistados en Grecia subrayan que en los últimos años se han producido notables avances en la dirección de intentar proteger a la víctima en este tipo de delitos.

En ES, las víctimas entrevistadas (cinco de las seis víctimas) valoraron muy negativamente esta experiencia, pues fueron cuestionadas, e incluso en un caso extremo se

⁴⁸ Sobre la insatisfacción de las víctimas de violencia sexuales en el momento de la denuncia SPENCER, D., DODGE, A., RICCIARDELLI, R., DALE BALLUCCI, D., "I Think It's Re-Victimizing Victims Almost Every Time: Police Perceptions of Criminal Justice Responses to Sexual Violence", *Critical Criminology*, 26, 2018, pp. 189-209. MAIER, S. L. *Rape, victims, and investigations: Experiences and perceptions of law enforcement officers responding to reported rapes*, New York and London: Routledge, 2014. KOSTER, N.-S. N., KUIJPERS, K. F., KUNST, M. J. J., der LEUN, J. P. V. "Crime victims' perceptions of police behaviour, legitimacy, and cooperation: A review of the literature", *Victims & Offenders*, 11(3), 2016, pp. 392-435. PAGE, A. D., "Judging women and defining crime: Police officers' attitudes toward women and rape", *Sociological Spectrum*, 28(4), 2008, pp. 389-411.

⁴⁹ GRUBB, A. & TURNER E., "Attribution of blame in rape cases: a review of the impact of rape myth acceptance gender role conformity and substance use on victim blaming", *Aggression and Violent Behavior*, 17, 2012, pp. 443-452. PATTERSON, D., "The linkage between secondary victimization by law enforcement and rape case outcomes", *Journal of interpersonal violence*, 26(2), 2011, pp. 328-347. MILLER, A.K., HANDELEY, I.M., MARKMAN, K.D. & MILLER, J.H., "Deconstructing selfblame following sexual assault: the critical roles of cognitive content and process", *Violence against Women*, 16, 2010, pp. 1120-1137. WEISS, K.G. "Too Ashamed to Report: Deconstructing the Shame of Sexual Victimization", *Feminist Criminology*, 5(3), July 2010, pp. 286-310.

desanimó⁵⁰ a la víctima a que interpusiera la denuncia. Esto muestra una clara diferencia con las posturas que defienden los operadores policiales, que afirman que cuando reciben la denuncia intentan proteger a la víctima.

Respecto a la cuestión de la posibilidad de interponer una denuncia en un idioma conocido y comprendido por la víctima, mediante asistencia lingüística es preciso señalar que la traducción e interpretación a víctimas de delitos sexuales también es susceptible de mejora. Los profesionales carecen de formación en cuestiones de género y cometen errores en la terminología técnica con que se comunican con las víctimas; en algunas lenguas y culturas, los traductores son generalmente hombres, llegando incluso según algunos entrevistados (ES) a deformar el relato. En el caso de una de las víctimas entrevistadas (ES), la agresión sexual tuvo lugar en UK, mientras que estaba de visita en ese país. La víctima puso la denuncia en ese UK, y en todo momento en la comisaría inglesa y durante la exploración forense allí fue asistida lingüísticamente por personas que dominaban la lengua española. Además, fueron explicándole de manera comprensible la situación paso a paso. Sin embargo, no recibió ningún documento por escrito de la denuncia y cuando, a las 24hs de haber ocurrido los hechos, regresó a España, tuvo que iniciar el proceso desde el principio, e interponer denuncia en ES (su país de origen), donde, a diferencia del trato recibido en UK, fue severamente cuestionada por los operadores policiales españoles.

E. Los derechos de “acceso a” y el “apoyo integral de” los servicios de apoyo a las víctimas

La VRD recoge la necesidad de que las víctimas puedan acceder de manera confidencial y gratuita a servicios de apoyo de carácter integral (apoyo emocional, psicológico y legal) en las diferentes fases del proceso penal, e incluso que puedan recibir esa asistencia después de la conclusión del proceso penal. Además, se prevé que ese apoyo sea extensivo a sus familiares, en el caso que corresponda. Estos servicios de apoyo pueden ser tanto organizaciones públicas como no gubernamentales o privadas, atendido por profesionales o voluntarios. En el art. 9 VRD se subraya la necesidad de que los servicios proporcionen un apoyo integral a las víctimas en los distintos ámbitos en donde lo necesiten, con el objetivo de prevenir la victimización secundaria o reiterada, intimidación o represalias.

En los tres países existen servicios de apoyo a las víctimas, con un mayor o menor grado de especialización en violencia sexual, y a las víctimas se les informa de su existencia para que puedan acceder a ellos. Sin embargo, en los tres países⁵¹ los servicios están, en

⁵⁰ A ese papel disuasorio se ha referido expresamente un órgano judicial en España. Un Juzgado de lo Penal español ha condenado a un tatuador por abuso sexual a tres clientes, pero en lo que aquí importa califica de negligente e ineficaz la actuación de los policías que desmotivaron a una de las víctimas hasta el punto de renunciar inicialmente a presentar la denuncia y buscar alternativas. El Juez añade que “cualquier otra víctima menos sensibilizada, cualquier otra persona menos beligerante o que se sintiera culpabilizada por lo sucedido hubiera abandonado”. SJP Valladolid, 41/2020 - ECLI:ES:JP:2020:41.

⁵¹ Para información más detallada, véanse los respectivos informes nacionales de RE-TREAT (español, griego e italiano).

algunos aspectos, bastante lejos⁵² de cubrir todas las necesidades de una víctima de violencia sexual; además, tanto en Italia, Grecia, como en España, existen también notables diferencias en el acceso a los servicios de apoyo y la multidisciplinariedad del apoyo entre zonas rurales y urbanas⁵³, así como entre ciudades (grandes-medianas versus pequeñas).

En general los servicios no son siempre todo lo especializados en violencia sexual como sería deseable en ninguno de los tres países. Pej. en España el apoyo a la víctima de violencia sexual se canaliza en general a través de los servicios de apoyo para víctimas de violencia de género, pero éstos están específicamente orientados a la violencia ejercida en el contexto “familiar-doméstico” y no a las víctimas de violencia sexual fuera de ese ámbito. A lo anterior se suma, el que la lista de espera, en especial para acceder a atención psicológica, es excesiva. Por otro lado, los servicios cuentan con un déficit del número de profesionales y de la estabilidad de los mismos, por lo que una víctima no suele ser atendida por el mismo especialista durante todo el proceso penal, lo que sí que supone un gran obstáculo, según informan las víctimas entrevistadas, pues con cada nuevo profesional hay que establecer un nuevo vínculo, que no siempre es fácil y ello, además, implica volver a contar otra vez lo que sucedió, con lo que es inevitable una cierta revictimización. En el caso de la asistencia psicológica, las víctimas entrevistadas subrayan que el intervalo que transcurre inter-sesiones en ocasiones es muy largo, por lo que no experimentan el progreso que ellas esperan y necesitan en las secuelas producidas por la violencia sufrida. En la misma línea, las víctimas indican que sería muy positivo que sus familiares⁵⁴ también tuvieran apoyo, pues eso les sería de ayuda ellos —en muchas ocasiones víctimas indirectas de la agresión sufrida— y a las propias víctimas. Asimismo, también les sería de ayuda para su recuperación el que, además de ser atendidas individualmente, pudieran participar en encuentros grupales, donde víctimas que hayan padecido violencia sexual puedan poner en común la manera en que se enfrentan a las secuelas derivadas.

En cuanto al apoyo legal, que en ocasiones también se da en estos servicios de apoyo, las víctimas entrevistadas en España que han tenido oportunidad de acceder a ese servicio se sienten muy satisfechas. De igual manera, cuando reciben el apoyo psicológico, también están bastante satisfechas con las profesionales que las atienden, salvo por las cuestiones que se han señalado (tiempos largos de espera hasta que consiguen ser atendidas, cambio de especialistas, etc.).

⁵² La necesidad de mejora es una exigencia común en otros EEMM, véase en Bélgica PEETERS, L. VANDENBERGHE, A., BAVO HENDRIKS, B., GILLES, CH., ROELEN, K. AND KEYGNAERT, I., “Current care for victims of sexual violence and future sexual assault care centres in Belgium: the perspective of victims”, *BMC International Health and Human Rights*, 2019, pp. 19-21.

⁵³ Vid., LOGAN, T., EVANS, L., STEVENSON, E., & JORDAN, C. E., “Barriers to services for rural and urban survivors of rape”, *Journal of Interpersonal Violence*, 20, 2005, pp. 591-616.

⁵⁴ El VRD hace suya la interpretación aquí sugerida de víctimas indirectas, cuando establece: “(l)os familiares de las víctimas también pueden resultar perjudicados por el delito (...). Por consiguiente, esos familiares, que son víctimas indirectas del delito, también deben disfrutar de protección en el marco de la presente Directiva” en virtud de este DVR (considerando 19). En particular, “(l)os familiares tendrán acceso a los servicios de apoyo a las víctimas en función de sus necesidades y del grado de daño sufrido como resultado de la infracción penal cometida contra la víctima.” (art. 8.1).

Según lo expuesto, parece necesario que en los tres EEMM se preste especial atención a los servicios de atención a las víctimas dotándolos de más y mejores recursos, tanto económicos como humanos, para que puedan proporcionar el servicio de apoyo integral que las víctimas de violencia sexual demandan y necesitan, así como a sus familiares más próximos. Además, en el caso de los recursos humanos, no es sólo importante que aumente el número de profesionales, sino que esos profesionales sean realmente especialistas en víctimas de violencia sexual. Por último, pero no menos importante, como la VRD señala la necesidad de dar el apoyo a las víctimas, incluso una vez concluido el proceso, hay que contemplar este tipo de asistencia en los servicios, así como la atención a las víctimas de casos no denunciados, o incluso prescritos.

4.2. Participación en el proceso penal

En este epígrafe recorreremos los procesos penales en Italia, Grecia y, España, centrándonos en la participación de la víctima de violencia sexual y, más concretamente, en el cumplimiento efectivo de los derechos y garantías previstos en la VRD (vid. capítulo 3, arts. 10-17).

A. Los derechos a justicia gratuita y al reembolso de gastos

Los tres ordenamientos recogen con carácter general la necesidad de eliminar cualquier obstáculo que impida a las víctimas acceder a una atención jurídica gratuita, y que esa atención sea facilitada durante todo el proceso penal, desde su inicio hasta el final. Asimismo, subrayan la importancia de proveer de fondos esa asistencia legal y, en su caso, establecer un fondo de indemnizaciones estatal.

Sin embargo, los informes nacionales reflejan algunas disparidades en este punto. Mientras Italia garantiza⁵⁵ el derecho a la asistencia gratuita a las víctimas de delitos sexuales, España no siempre.

De acuerdo con el Informe RETREAT italiano las víctimas de violencia sexual siempre pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita, incluso aunque no pertenezcan a las categorías de ingresos normalmente previstas para ese derecho; una asistencia gratuita que comprende todo el procedimiento hasta la casación.

A diferencia de Italia, hasta el Proyecto de LOGILS en España la víctima de un delito de violencia sexual no tenía *per se* el derecho a la asistencia jurídica gratuita porque en este ámbito el legislador español solo reconocía este derecho a la víctima que se encontraba en alguna de las siguientes condiciones. Por un lado, a la víctima cuyos recursos económicos no superaban determinado umbral. Y, por otro lado, a las víctimas que aun teniendo recursos, fueran víctimas de alguno de los siguientes delitos: i) Trata

⁵⁵ Vid, art. 76, párr. 4 ter Decreto Presidencial Italiano 115/2002.

de personas; o ii) Violencia de género en el sentido estricto o limitado que utiliza el legislador español de modo que sólo es válido a la violencia sexual ejercida por pareja o expareja⁵⁶. La víctima de violencia sexual que no se encontraba en alguno de los anteriores supuestos no tenía derecho a priori a la asistencia jurídica gratuita. Un déficit que suscitaba diversas críticas en la práctica. Precisamente para paliar ese problema, algunos Consejos de la Abogacía habían firmado acuerdos con las CC.AA para ampliar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de agresiones sexuales⁵⁷ con independencia de la falta de recursos económicos. Por eso, la doctrina y los operadores jurídicos reclamaban una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para que las víctimas de delitos sexuales (ya sean menores o mayores de edad) puedan tener un abogado gratuito para todo el procedimiento. La asistencia legal gratuita juega un papel muy importante en evitar o reducir la revictimización. En ese sentido, la mayoría de las víctimas entrevistadas en España que han recibido atención legal personalizada a través del servicio de apoyo de la C.A. de Madrid destacaban el alto grado de satisfacción con la atención recibida. Ello, además, redundaba en rebajar el nivel de incertidumbre, a aumentar la cantidad y precisión de la información sobre el desarrollo del proceso que recibe la víctima, a incrementar su preparación y anticipación en los diferentes momentos del proceso y, en consecuencia, contribuye a la disminución de su revictimización. Por eso, el Proyecto de LOGILS⁵⁸ pretende reconocer-extender expresamente el derecho al asesoramiento jurídico previo y asistencia jurídica gratuita en los procesos derivados de la violencia.

Los operadores entrevistados en Grecia también reclaman, según el informe nacional-griego de RE-TREAT, que a las víctimas de violencia sexual se les preste también asistencia jurídica gratuita para superar las barreras financieras.

B. El derecho a ser oída/a

Los EEMM deben garantizar el derecho de la víctima a ser oída. La VRD desglosa este derecho en dos dimensiones. Por un lado, la víctima ha de tener la posibilidad de ser oída, con independencia de su edad, durante las actuaciones; en el caso de un menor ha de tenerse debidamente en cuenta en este punto su edad y madurez. Y, por otro lado, el derecho de la víctima a facilitar elementos de prueba. Derechos que recogerán las respectivas leyes procesales, siguiendo los procedimientos admitidos por cada Derecho nacional.

⁵⁶ Vid. el art. 2 letra g) de la Ley española 1/1996, de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita “(c)on independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género (...) y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato”.

⁵⁷ Así, p.ej. el Acuerdo entre la Junta de Castilla y León y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León en 2017, o el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía de Castilla La Mancha de 2018.

⁵⁸ Vid. el Proyecto LOGILS urge al legislador a modificar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en tal sentido.

B.1. En la fase de investigación o preprocesal

En relación con esta cuestión, los operadores policiales entrevistados en los tres países subrayan que es fundamental la capacidad de escucha que tenga el oficial que atienda a la víctima, en muchos casos es la primera persona que tiene constancia oficial de los hechos. Al mostrar esa actitud, la víctima se sentirá oída, escuchada y podrá facilitar con mayor probabilidad la información relevante para esclarecer los hechos.

En concreto, según informan los operadores policiales entrevistados, las preguntas que formulan a la víctima, en el momento de recoger la denuncia, van sobre todo dirigidas a que describan el suceso, sin establecer a priori la duración del registro de la denuncia, y ajustando el ritmo y dinámica de ese registro a las necesidades concretas de la víctima, evitando además la realización de preguntas sugestivas. Todo ello dirigido a que la víctima perciba que está siendo oída y escuchada.

En IT, en algunas ocasiones se graba audiovisualmente la declaración de la víctima para evitar volver a preguntarle y, a la vez, para hacer que la víctima se sienta escuchada porque el operador puede empatizar más con ella y consolarla, en caso de que sea necesario, porque puede mantener una escucha activa sin necesidad de tomar notas.

Curiosamente, la perspectiva de los operadores policiales contrasta llamativamente con la postura de las víctimas entrevistadas (ES), quienes mayoritariamente se sintieron cuestionadas cuando interpusieron sus denuncias. Además, en relación con el tipo de preguntas que les formularon, indican que fueron muchas, muy directas y específicas, y que a veces no tenían posibilidad de expresar los detalles con sus propias palabras y a su ritmo.

Respecto al momento en el que el/la juez/a toma declaración a la víctima en la fase de instrucción, los jueces afirman que evitan centrarse en las características individuales de las víctimas, formulando preguntas exclusivamente relacionadas con la verificación de los hechos. De esta manera se procura que la víctima perciba que está siendo oída su denuncia por el/la juez.

En esta ocasión también se produce una discrepancia entre la postura mantenida por los operadores judiciales y la vivencia de las víctimas entrevistadas, pues cuatro de ellas se sintieron muy frustradas y decepcionadas por el trato recibido por la jueza de instrucción, quien no tuvo una actitud de escucha activa, sino más bien de cuestionamiento. Por tanto, no se sintieron oídas, además de quejas de no entender la situación, especialmente, porque se trataba de una jueza, de otra mujer.

B.2. En la vista oral

La judicatura enfatiza la necesidad de ser muy cuidadosos con el tratamiento que se proporciona a las víctimas durante el juicio cuando han de testificar, para que esta pueda expresarse y ser oída.

En el caso de las víctimas entrevistadas en España, sólo se ha celebrado la vista oral en uno de los casos, y la experiencia de la víctima fue positiva, se sintió oída y escuchada

por todos los operadores allí presentes. Tan sólo sintió cierto grado de cuestionamiento por las preguntas directas formuladas por el abogado de la defensa, aunque lo interpretó como parte de su función en el juicio.

4.3. Protección general y necesidades de especial protección

Los capítulos 4 y 5 de la VRD recogen un amplio conjunto de derechos y medidas que tratan de garantizar la *protección de las víctimas*, y para ello hay que preservar su *seguridad*, *evitar la confrontación* con quien les agredió, salvaguardar su *privacidad* y respetar su *dignidad*. Además de tener en cuenta y atender las *necesidades especiales* y la *diversidad funcional* que pueda requerir cada una de las víctimas en particular.

El *prius* lógico de ese singular espectro de protección es la necesaria *evaluación individual* de la víctima a fin de determinar si es una víctima *particularmente vulnerable* a la victimización secundaria o reiterada, a la intimidación o, incluso a las represalias. Una evaluación que tomará en consideración, entre otros parámetros, las características personales de la víctima, y el tipo, naturaleza y circunstancias del delito. Sin perjuicio del resultado de la evaluación en concreto de tales elementos, la VRD determina de algún modo un conjunto de víctimas que merecen en todo caso una consideración obligada. Y, entre ellas, cita expresamente a las víctimas de violencia sexual. Pero no es sólo una cuestión de esa referencia explícita, sino que el legislador europeo también advierte que en la evaluación individual hay que prestar especial atención a las víctimas que han sufrido un daño considerable debido a la gravedad, las víctimas afectadas por un delito motivado por prejuicios o discriminación relacionado con sus características personales y las víctimas cuya relación o dependencia del infractor les haga especialmente vulnerables. Sin perjuicio de las particularidades del caso concreto, en general las víctimas de delitos sexuales se encuentran en esas circunstancias⁵⁹.

En definitiva, las víctimas de delitos sexuales vendrían a ser víctimas que no sólo tienen derecho al marco general de protección previsto en la VRD (arts. 18-21), sino también al marco especial de protección (arts. 23-25). Conseguir garantizar la protección de las víctimas pasa por tener en cuenta multitud de factores de distinta naturaleza a lo largo del proceso penal. Pasamos a señalar los que han surgido en las entrevistas realizadas a profesionales y víctimas.

A. El derecho al menor número de declaraciones y reconocimientos médicos

La multiplicación de declaraciones de la víctima constituye uno de los factores que más vulnera los derechos de la víctima y abunda en la revictimización. Las mujeres

⁵⁹ Nos remitimos al epígrafe 3.2 de este informe en el que se recogen una panorámica de la Justicia de los delitos sexuales en los tres EEMM.

entrevistadas en España y Grecia subrayan, de manera consistente, el efecto devastador que tiene contar en repetidas ocasiones los hechos, intentar responder a un número amplio de preguntas específicas para las que no siempre tienen respuesta y sentir cómo les cuestionan cuando no satisfacen la demanda porque no se acuerdan o se sienten confusas. Los profesionales también subrayan el efecto negativo de este factor.

En muchas ocasiones, la repetida toma de declaraciones se debe a una falta de cooperación y coordinación entre operadores y/o instituciones. Este aspecto es subrayado por las víctimas entrevistadas, y reclaman una mejor y mayor comunicación *intra* e *inter* profesionales porque cada vez que avanza el proceso tienen que contar de nuevo lo que ocurrió, o incluso si simplemente cambia el profesional que les atiende en una determinada instancia en donde ya lo han contado con anterioridad, se ven obligadas a relatarlo de nuevo.

La manera de solucionar la situación y atajar esas múltiples tomas de declaración tan perniciosas para las víctimas, exige, por un lado, que haya una comunicación *inter* profesionales e *inter* instancias fluida, acompañándolo de una grabación de la declaración de la víctima al comienzo del inicio del proceso, y que esa declaración sea tomada por un profesional realmente cualificado en delitos de violencia sexual. Además, si legalmente fuera posible realizar esa toma de declaración con las partes presentes (p.ej., a través de un dispositivo de circuito cerrado), también se estaría velando por las garantías procesales de la persona acusada. Es decir, aplicar un procedimiento de *prueba preconstituida* adaptada a los casos de víctimas adultas, siempre y cuando la legalidad vigente lo permita. En caso de que no fuera posible, al menos habría que reducir el número de toma de declaraciones a las estrictamente necesarias y realizarlas lo antes posible para que no se pierda o deteriore la información relevante para el caso, ni se vea seriamente comprometida la calidad del contenido de la declaración por olvidos y distorsiones involuntarios, o por sugerencias (no intencionales) debidas a la formulación de preguntas o el repaso que hace la víctima por intentar no olvidar los detalles de lo ocurrido, por si tiene que volver a contar lo que ocurrió.

Otra carencia que señalan los profesionales de distintos ámbitos (policial, forense, sanitario, judicial, etc.) es la escasez de protocolos estandarizados de amplia aplicación en el ámbito nacional correspondiente. P.ej. en Italia existe el *Código Rosa*, que es un protocolo estandarizado para agilizar la toma de muestras biológicas, la consulta con el psicólogo y el examen médico con un médico especializado, y un ginecólogo en casos de violencia sexual. En España, la UFAM también agiliza todos estos procedimientos.

Sin embargo, cuando se entrevista a las víctimas en España se observa que para cada una de ellas los procedimientos seguidos han sido diferentes, a pesar de ser todas víctimas de violencia sexual, y ello parece depender del lugar concreto en donde se interponga la denuncia, incluso dentro de una misma región.

Por tanto, es necesario consensuar protocolos estandarizados y aplicarlos de manera generalizada para que todas las víctimas tengan garantizados su derecho a la protección integral de igual manera.

B. El derecho a que el profesional receptor de la denuncia sea del mismo sexo

Dentro del marco de protección la VRD prevé expresamente que *todas las declaraciones⁶⁰ que se tomen a las víctimas de violencia sexual se realizarán por una persona del mismo sexo que la víctima siempre que ésta así lo desee*. No obstante, se recogen tres circunstancias que limitan el ámbito de esa disposición protectora. Así, la norma no se aplicará i) a la declaración que reciban el Fiscal o el Juez; ii) si la víctima no lo expresa; iii) *va en detrimento del desarrollo del proceso*. Los dos últimos límites pueden ser problemáticos en la práctica porque una lectura excesivamente amplia o flexible determinaría de facto que la excepción se convirtiese en regla general. P.ej. que la víctima haya expresado ese deseo y no se respete cuando *vaya en detrimento del desarrollo del proceso*; o, que la víctima no exprese ese deseo simplemente porque no se le haya informado de esa posibilidad que no tiene por qué conocer previamente.

Los tres informes nacionales elaborados en el marco del proyecto RE-TREAT⁶¹ ofrecen una panorámica dispar en la garantía efectiva de este derecho, y también opiniones heterogéneas. Entre los operadores policiales (ES-IT) y entre las propias víctimas entrevistadas (ES) se observan discrepancias respecto a la necesidad de que sea una mujer quien reciba la denuncia; pero en lo que sí están de acuerdo policías y víctimas es en que lo fundamental es la escucha activa del profesional que las atiende, de forma que la víctima se sienta escuchada y respetada y, por extensión, protegida.

En la práctica, en Italia y Grecia, una víctima de un delito sexual no tiene derecho a elegir que el policía que le tome declaración sea de su mismo género. No obstante, la mayoría de las declaraciones en Italia se reciben por dos policías heterogéneos. En la práctica, en España sí se garantiza el derecho de la víctima a que le reciba declaración una persona de su mismo sexo.

Ahora bien, no se trata sólo de la efectividad del derecho en la práctica, sino que de la VRD parece inferirse *la necesidad de que se pregunte* a la víctima sobre este extremo; y es que difícilmente podrán pronunciarse al respecto si no se les informa. La información de este derecho no parece, a tenor de los informes nacionales ES-GR-IT de RE-TREAT, realizarse en Grecia e Italia; pero algunas incidencias parecen producirse también en España cuando los policías entrevistados sostienen que “casi ninguna víctima ha pedido expresamente que le tome declaración una mujer, *aunque en caso de ser consultadas expresamente sobre su preferencia*, casi siempre dicen que prefieren una mujer” (la cursiva es nuestra).

Los policías entrevistados en España e Italia coinciden en restar importancia al papel que puede jugar en el mejor tratamiento de la víctima de un delito sexual el que ésta

⁶⁰ Aunque no lo dice expresamente, esta disposición parece estar pensando en las declaraciones que la policía reciba en la investigación a las víctimas de delitos sexuales. Nótese que el precepto se refiere a “todas” las declaraciones lo que parece algo contradictorio con la previsión de reducir al mínimo sus declaraciones.

⁶¹ Para información más detallada, véanse los respectivos informes nacionales de RE-TREAT (español, griego e italiano).

y el policía compartan el mismo sexo⁶²; y es que en su opinión el tratamiento adecuado de la víctima en la declaración depende de las habilidades de acogida, escucha, empatía y apoyo que no dependen del género del entrevistador, sino de aptitudes y capacidades individuales y, sobre todo de formación y especialización. Entre las víctimas entrevistadas en España no había unanimidad en cuanto a la preferencia del género de la persona que recibiera la denuncia. Mientras algunas manifestaron la oportunidad de que les atendiera una mujer en lugar de un hombre, otras subrayaron que lo importante es la actitud de escucha activa, la sensibilidad y la capacidad de adaptación a las distintas circunstancias de la persona que recoge la denuncia.

Lo sorprendente en este punto es la diferencia efectiva del derecho y de las opiniones de los profesionales en el ámbito sanitario y el ámbito policial. Mientras nadie pone en duda que en el ámbito sanitario la exploración a víctimas sexuales se realice en general por un médico o facultativo del mismo género que la víctima, la misma cuestión en sede policial despierta un amplio debate. Quizá debería recordarse la claridad de la VRD en este punto y, sobre todo que la declaración de la víctima de violencia sexual gira sobre una experiencia traumática, que requiere *verbalizar* agresiones que afectan grave y directamente a la esfera más íntima de la persona. Por tanto, parece *a priori* prudente y adecuado que las víctimas tengan derecho a ser atendidas por una persona de su mismo sexo⁶³ en sede policial.

C. El derecho a profesionales especializados

La VRD prevé que la víctima a la que se le haya reconocido necesidades especiales de protección, como debería ser la víctima de un delito sexual, se le reciba declaración durante la investigación por profesionales con formación adecuada a tal efecto o con su ayuda.

El legislador europeo prevé dos posibilidades y ambas pasan por la existencia de personal con una formación adecuada en el ámbito de delitos sexuales. Por un lado, que la declaración de la víctima *se reciba directamente por profesionales especializados* (policías que hayan recibido una formación adecuada en este punto), o por policías que no la hayan recibido, pero *con la ayuda de otros* compañeros u otros profesionales especialistas que sí tengan esa formación.

El Código de Buenas Prácticas de la UE⁶⁴ en materia de violencia de género recuerda también a los EEMM que la policía debe recibir *una formación completa y suficiente* en esta materia, que deben ofrecerse *planes de formación específica que les transmitan*

⁶² Resulta curioso, sin embargo, que los policías entrevistados en Italia asuman sin controversia que en caso de víctimas menores de edad o muy jóvenes el receptor de la declaración deba ser necesariamente una mujer.

⁶³ En relación con la relevancia del sexo femenino de las policías e intérpretes, nos remitimos a las conclusiones del Proyecto Europeo (JUST/2014/RDAP/AG/HARM/) “EU FEM Roadmap forced/early marriage” y en concreto su “Guía de la UE sobre matrimonio forzado/precoz para profesionales de primera línea”, 2017, http://femroadmap.eu/FEM_roadmap_ES.pdf

⁶⁴ Vid. Manual de la Unión Europea Buenas Prácticas Policiales para combatir la violencia contra las mujeres, accesible en https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/publicaciones/Manual_UE_Buenas_Practicas_contra_VdG.pdf

conocimientos jurídicos especializados, y que fijen normas de conducta profesional y procedimientos de intervención policial.

De los tres informes nacionales (ES-GR-IT) de RE-TREAT⁶⁵ se desprende que en general la formación de los policías necesita mejorar; un déficit que las fuerzas de seguridad intentan superar con buena voluntad y sensibilidad, pero desgraciadamente eso no suple la debida formación, ni evita episodios de revictimización. De hecho, la formación y la especialización es una de las reclamaciones comunes entre la mayoría de los entrevistados en los tres países mediterráneos; en especial, entre las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, los abogados, así como las víctimas (ES) y servicios de atención a víctimas.

No obstante, las carencias de formación entre los policías no son de igual intensidad en unos países que en otros; pero, en cualquier caso, los tres EEMM han experimentado en los últimos años algunos avances en este ámbito, aunque también subrayan de forma constante que la falta de recursos humanos y la carga de trabajo les impide prestar en muchas ocasiones una atención adecuada a las víctimas⁶⁶.

Precisamente en esa línea, los policías entrevistados en Grecia reclaman el establecimiento en las comisarías de unidades específicas para delitos sexuales. Los operadores criticaron la falta de formación especializada entre la policía, pero también revelaron ciertas esperanzas en las nuevas Oficinas de Violencia Doméstica que, entre otras funciones, se ocupará de la mejora de la capacitación policial. Ahora bien, el informe nacional griego de RE-TREAT también subraya que los déficits en recursos humanos y la formación no sólo afectan a la policía, sino también a la insuficiencia de otros especialistas de apoyo (vid. en salud mental) en la toma de declaración.

La formación en este ámbito de la policía España e Italia parece algo mejor, pero en los dos países existen grandes diferencias dependiendo del ámbito territorial. En Italia no todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen formación específica en víctimas de delitos sexuales, y, en general, se procura que los policías que no tienen una capacitación suficiente reciban la asistencia de algún compañero más experimentado cuando tomen declaración a las víctimas. Algunas comisarías cuentan con secciones especializadas en *violencia de género*⁶⁷ y, por tanto, los policías adscritos a esas secciones están especializados, pero en otros municipios más pequeños no existe personal especializado o, incluso habiendo también allí algún policía con una cierta formación, no puede garantizarse un servicio especializado a las víctimas de delitos sexuales a cualquier hora del día. En cualquier caso, la calidad de las actividades de capacitación se ha implementado considerablemente en los últimos años.

En España las fuerzas policiales con competencias en todo el territorio nacional están organizadas en unidades especiales. Por un lado, la Policía Nacional cuenta con

⁶⁵ Para información más detallada, véanse los respectivos informes nacionales de RE-TREAT (español, griego e italiano).

⁶⁶ MONROE, L. M., KINNEY, L. M., WEIST, M. D., DAFEAMEKPOR, D. S., DANTZLER, J., & REYNOLDS, M. W., "The experience of sexual assault: Findings from a state-wide victim needs assessment", *Journal of Interpersonal Violence*, 20, 2005, pp. 767-777.

⁶⁷ Entendida esta en un sentido amplio y, por tanto, comprensiva de cualquier delito sexual contra una mujer.

172 Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) repartidas por toda España y una unidad central en Madrid. Por otro lado, la Guardia Civil cuenta con el Equipo de Mujer-Menor (EMUME) al que le corresponde la investigación, entre otros, de los delitos contra la libertad sexual, y que también despliega sus funciones en todo el territorio a través de Puntos de Atención Especializada (PAE) de policía judicial de la Guardia Civil. Las víctimas entrevistadas en España que han sido atendidas por la unidad especializada están más satisfechas con el trato policial recibido que las que no fueron atendidas por esta Unidad. No obstante, la formación entre los policías adscritos a esas unidades es parcial e insuficiente. *Parcial*, porque la formación ni siquiera es obligatoria para los órganos especializados en la mujer. Y también *insuficiente* en cuanto al contenido, la duración y el formato. En la mayoría de las ocasiones no incluye formación sobre la victimización sexual, ni técnicas ni habilidades de comunicación en relación con este tipo de víctimas, la duración oscila entre 5 días y 2 meses y en muchos casos se limita a formación *online*, en el mejor de los casos semipresencial y excepcionalmente de forma íntegramente presencial.

Los profesionales entrevistados (policías, jueces, magistrados, abogados, profesionales de salud mental, etc.) demandan la necesidad de especialización, pues, aunque en los tres países hay algún tipo de formación, ésta no llega a todos los profesionales por igual y, de llegar, es muy teórica y breve. En esta misma línea, todas las víctimas entrevistadas se han encontrado en algún momento, o incluso en varios momentos, del proceso con profesionales que no han sabido atenderlas adecuadamente por no estar debidamente cualificados. Cabe señalar, además, que la mayor especialización no está dependiendo en la actualidad de una contribución pública, sino que es el/la profesional quien se la procura a nivel personal a través de másteres, doctorados, cursos de larga duración, etc.

En relación con profesionales especializados, en determinadas regiones y comarcas de los tres países existen unidades policiales especializadas, o al menos dirigidas más específicamente, a la atención de las víctimas de violencia sexual, lo que supone un agravio comparativo para con las víctimas, dependiendo del lugar donde presenten la denuncia, pues no todas van a tener a su alcance los mismos servicios ni personal especializado. Por ello, es urgente uniformizar los servicios que se ofrecen a las víctimas de delitos sexuales en el territorio nacional de cada EM para que todas reciban un trato especializado igualitario, con independencia de la localidad donde se interponga la denuncia.

D. El derecho a un entorno físico: adecuado y/o adaptado

El legislador europeo prevé que durante la investigación deben existir dependencias, concebidas o adaptadas, para tomar declaración a las víctimas con necesidades especiales de protección. La VRD utiliza expresamente la conjunción alternativa “o” y, de acuerdo con la terminología empleada, parece en principio pensar en infraestructuras que a priori hayan sido diseñadas a esos efectos o sin haber sido construidas para ello, se adapten.

En el caso de los órganos judiciales, la VRD también recoge que los Tribunales deben contar con determinadas medidas arquitectónicas o de diseño que puedan garantizar

la protección de víctimas con necesidades especiales (véase, víctimas de delitos sexuales) con la finalidad de evitar el contacto visual con el infractor y/o que permitan que pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas.

La guía de buenas prácticas sobre la aplicación de la VRD sugiere a los EEMM introducir las medidas citadas y, de algún modo, normalizar su utilización en el funcionamiento ordinario de la justicia penal y las rutinas de trabajo de los distintos operadores que en él trabajan. Una finalidad que exige, entre otras cosas: i) adaptar y modernizar las instalaciones; ii) asegurar que todos los profesionales que trabajan con víctimas con necesidades específicas de protección reciban una formación especializada sobre el impacto de la delincuencia en las víctimas, estrategias para identificar los riesgos de revictimización, así como estrategias para limitar y superar su impacto.

D.1. Las comisarías y los hospitales

En términos generales, las comisarías no están adecuadamente preparadas para atender a las víctimas de violencia sexual. Por regla general, las dependencias policiales en absoluto resultan acogedoras y no tienen espacios preparados para atender a las víctimas. En muchas ocasiones, físicamente, se le toma declaración en una oficina con la puerta abierta, en donde hay más personas que están interponiendo denuncias, saliendo y entrando testigos, policías, administrativos, con nivel elevado de ruido, etc. A ello se suma que el policía que atiende no tiene por qué estar especializado en violencia sexual.

La recepción de los hospitales y centros de salud, donde las víctimas llegan solicitando una exploración física, tampoco cuentan con una dependencia reservada para exponer su situación, con lo que la privacidad de la víctima se ve seriamente comprometida.

D.2. Los órganos judiciales

La VRD también prevé que, en el curso ya propio del proceso penal ante los Tribunales, la víctima con necesidades especiales de protección dispondrán de medidas que: a) eviten el contacto visual⁶⁸ con el infractor; b) garanticen que pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas.

En lo que, a las medidas tendentes a evitar el contacto visual entre la víctima sexual y el infractor, a que la víctima sexual sea oída sin estar presente en el juicio, y a celebrar la vista de delitos sexuales sin la presencia de público, los informes nacionales (ES-GR-IT) de RE-TREAT⁶⁹ ofrecen de nuevo un mapa muy dispar. En los tres países existe un salto significativo entre la previsión normativa y la realidad práctica; un escenario que en la mayoría de las ocasiones no parece efectivo en la protección de la víctima sexual que

⁶⁸ A través de cualquier medio, incluida la tecnología, e incluso durante la práctica de la prueba.

⁶⁹ Para información más detallada, véanse los respectivos informes nacionales de RE-TREAT (español, griego e italiano).

requiera de un amparo específico y que, desgraciadamente, en muchos casos parece asociado a falta de recursos y también a una insuficiente formación. Pero veamos algo más sobre cada una de ellas.

Las leyes procesales de los tres países mediterráneos prevén medidas para evitar el contacto visual entre la víctima y el infractor, la posibilidad de declarar sin estar estrictamente presente en la sala de vistas y celebrar el juicio sin público. Unas medidas que, sin perjuicio de algunas diferencias, parecen generalizadas cuando se trata de víctimas sexuales menores; pero que en el caso de las víctimas sexuales adultas siguen siendo excepcionales.

Ahora bien, el estado de la cuestión en la práctica es muy dispar. En Italia y España parece relativamente similar; incluso también coinciden en la disparidad territorial *ad intra* a nivel nacional que desde el punto de vista del diseño y las tecnologías determina que la mayoría de las infraestructuras estén anticuadas u obsoletas. En ambos países (ES-IT) se aplican con regularidad medidas que evitan el contacto visual entre la víctima sexual y el acusado en el juicio. Así, la mayoría de las víctimas de delitos sexuales tienen que declarar como testigos en el juicio oral, y hacerlo además en la propia sala de vistas; eso sí, en ambos países, la sesión se celebrará a puerta cerrada y adoptando medidas físicas de protección simples y no tecnológicas, como una videoconferencia desde otra Sala. Dicho de otra forma, la preconstitución de la prueba en una víctima adulta no existe o es muy excepcional, las víctimas de delitos sexuales adultas declaran en el juicio oral en la misma sala de vistas sin público y a través de una mampara o biombo que evita el contacto visual con el acusado. Las Magistradas entrevistadas en ES destacaron la importancia del principio de inmediación para exigir que la declaración testifical de la víctima sea presencial y no a través de medios telemáticos. Con todo, algunas magistradas explicaron que en ocasiones adoptaban algunas medidas especiales tendentes a ofrecer un tratamiento adecuado a la víctima (sentada en lugar de estar de pie) y mejorar su percepción de protección dejando que declaren con una mesa delante que les sirve de parapeto.

Sin perjuicio de lo anterior, sólo algunos órganos judiciales de algunos territorios en España e Italia cuentan con las infraestructuras y tecnología suficiente que permita garantizar las medidas previstas en la VRD y, en especial, aquellas que permiten que la víctima sea oída en el juicio oral sin estar presente en la sala de vistas, declarando a través de videoconferencia, incluso desde una sala adyacente, pero en todo caso sin tener contacto visual alguno con el acusado. Con todo, su número es todavía reducido en ambos países, lo que determina que salvo casos extraordinarios su utilización queda reservada a víctimas menores (y no en todas). En la ciudad de Roma cuentan con una pequeña sala conocida como “Sala Aurora”, conectada a las salas de audiencias para que los niños y otras víctimas en condición de vulnerabilidad puedan declarar desde allí. En ES, las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, etc. disponen de instalaciones más apropiadas y mejores tecnológicamente; y, en general, se está invirtiendo en su extensión en todo el territorio nacional, pero muy despacio. Cuando su existencia sea más generalizada, también debería hacerse un balance de su funcionamiento en la práctica.

Grecia parece todavía muy lejos de la realidad italiana o española en cuanto a la existencia y efectividad de medidas que eviten el contacto visual entre víctima e infractor,

las infraestructuras y tecnologías que permitan la declaración de la víctima sexual adulta fuera de la Sala de vistas, etc. A pesar de las limitaciones, una lectura integradora de las entrevistas realizadas a las víctimas y demás profesionales en Grecia parece indicar que desgraciadamente esas medidas no sólo no existen o no funcionan, sino que por unas razones o por otras, en muchas ocasiones las víctimas declaran en el acto del juicio sin ningún de protección física y delante incluso del acusado, sin hacerlo siquiera en una posición yuxtapuesta que evite una confrontación física. Caso distinto es el de la víctima sexual menor para quienes al igual que en Italia y España, también en Grecia está prevista la preconstitución de la prueba, practicándose allí incluso en la oficina del psicólogo infantil en presencia del interrogador.

E. La salvaguarda de la dignidad, intimidad y privacidad de la víctima

E.1. El derecho a que se eviten preguntas sobre su vida personal

La VRD también prevé que existan a disposición de las víctimas que requieran una especial protección medidas que eviten preguntas sobre su vida personal que no tengan que ver con el delito investigado y, en su caso, enjuiciado⁷⁰.

Los tres informes nacionales (ES-GR-IT) de RE-TREAT⁷¹ reflejan una situación similar a este respecto. En los tres países mediterráneos ha habido una evolución positiva en este sentido; antiguamente, y a veces no tan lejos, desgraciadamente a la víctima se le realizaban todo tipo de preguntas sobre su intimidad y otras cuestiones (p.ej. vestimenta en el momento de los hechos, vida íntima, etc.), que innecesariamente trataban de culpabilizarla del delito sufrido; en la actualidad, las preguntas parecen acotarse a los hechos delictivos en cuestión. El legislador nacional español ha realizado incluso modificaciones a tal efecto; véase, el art. 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española.

Un avance que, sin embargo, no excluye que en la práctica se formulen preguntas de este tipo. De hecho, aunque sean excepcionales, los tres informes muestran todavía algunos ejemplos en los que directa o indirectamente no se respeta esta garantía. P.ej., en Grecia, el estudio de campo efectuado sobre las sentencias del Tribunal Supremo incluye un caso en el que precisamente en la instancia se había culpabilizado a la víctima por su estilo de vida. En España, en un caso de agresión sexual en grupo a una joven que ha tenido una gran repercusión mediática, la defensa del acusado presentó un informe de seguimiento de la vida privada de la víctima tras el delito; informe que recogía fotografías

⁷⁰ Sorprende que la VRD circunscriba esta medida a las víctimas con necesidades especiales en lugar de hacerla extensiva a toda víctima. Tampoco la Guía de buenas prácticas sobre la aplicación de la VRD se inclina por la generalización de la medida, pero curiosamente sí se pronuncia en favor de esa extensión en otras dos medidas: el que la declaración se reciba en dependencias concebidas o adaptadas a tal fin y por profesionales con formación adecuada a tal efecto o con su ayuda.

⁷¹ Para información más detallada, véanse los respectivos informes nacionales de RE-TREAT (español, griego e italiano).

y comunicaciones privadas y afirmaciones como “(f)uma, sale de marcha y toma café con amigos”, y que el Tribunal admitió.

Este problema depende, por un lado, de la formación debida y esperada en esta materia de los profesionales a quienes corresponde, en cada uno de los estadios procesales del procedimiento, “preguntar”, pero también de los profesionales a quienes corresponde el “control” del interrogatorio. Sin perjuicio de que los problemas puedan surgir en la declaración de la víctima en la fase de investigación o incluso en una preliminar o *pre-procesal* (las preguntas de la policía, del Ministerio Fiscal, abogados, etc.), en el acto del juicio oral quien pregunta son las partes (esencialmente el Ministerio Fiscal y el abogado de la defensa), y el debate es dirigido por el Juez o los Jueces. La acción de preguntar y controlar respectivamente de todos ellos depende de las habilidades personales, pero en general los operadores consideran que el juicio se desarrolla, a este respecto, de forma adecuada. Sin embargo, esto no se produce siempre, pues en ocasiones las partes procesales conocen perfectamente cuáles deberían ser los límites de las preguntas a la víctima, pero voluntariamente deciden excederse. Un buen ejemplo de lo anterior lo encontramos en los letrados. Las entrevistas realizadas a distintos operadores (jueces, abogados, fiscales) en los tres países⁷² (ES-GR-IT) coinciden en que, de entre todas las partes que intervienen en el juicio oral, quien normalmente realiza este tipo de preguntas improcedentes es el abogado de la defensa. Y desgraciadamente las víctimas, a tenor de las entrevistas realizadas en España, suelen resignarse una vez más al declarar porque, entre otras cosas, entienden o asumen que es el papel que les corresponde ejercer en el proceso de defensa del acusado. Los abogados, de manera general, parecen también *autojustificarse* en ese sentido.

Al Juez le corresponde el control de las preguntas, pero el problema a veces es anterior, como se explica en el informe RE-TREAT italiano. Y es que el Juez controla la admisión o no de la pregunta, pero desde el punto de vista de la víctima, el problema es que una vez formulada el daño a la víctima ya está hecho, con independencia de que finalmente no deba responder; de hecho, uno de los abogados entrevistados en Italia deja entrever incluso una utilización de mala fe, asociada curiosamente con un modelo de defensa efectiva y especializada en este tipo de delitos. El pasaje de la entrevista señala que “un buen defensor, que tiene una preparación específica en este tipo de delitos, sabe que estas preguntas hunden a la víctima”.

El informe RE-TREAT español pone de relieve que en ese control judicial de las preguntas puede y debe jugar un papel importante también el Ministerio Fiscal solicitando la inadmisión de las que proceda por innecesarias o impertinentes, o que, de procederse a su admisión, se explique su finalidad por la parte que la fórmula (una vía que puede servir para evidenciar que no hay una finalidad probatoria objetiva y legítima detrás, sino la de ahondar en estereotipos erróneos de culpabilización de la víctima por el hecho).

Los miembros de la judicatura entrevistados en los tres países (ES-GR-IT) se autoevalúan muy positivamente en el control de las preguntas en el juicio oral; en España,

⁷² Para información más detallada, véanse los respectivos informes nacionales de RE-TREAT (español, griego e italiano).

según la judicatura, el control en el juicio oral es más estricto que en la instrucción. En ese sentido, algunas de las víctimas entrevistadas (en ES) señalan que mientras según esperaban se sintieron cuestionadas y desprotegidas cuando declararon en la fase de instrucción, casi casi lo normalizaron y la única víctima que había declarado en la vista oral sí que se sintió protegida, segura y vio garantizada su dignidad.

Cuando se les pregunta a otros profesionales en el ámbito del sistema de justicia criminal sobre el control de las preguntas en el acto del juicio oral, la opinión no siempre es unánimemente tan positiva como en la judicatura. En esa línea, un sector de la fiscalía (ES), de la abogacía (ES-IT) y de asociaciones de víctimas (ES-IT) opina que en ocasiones el Juez o el Tribunal se muestran algo flexible ante dudosas preguntas del abogado defensor por temor a que en caso contrario el acusado alegue posteriormente la vulneración del derecho de defensa y se anule el juicio en segunda instancia.

Más allá del control de las preguntas que corresponde al Juez o Tribunal en el acto del juicio oral, quizá también debería explorarse la prevención antes del comienzo del juicio como una buena práctica. P.ej. en un caso reciente de agresión en grupo a una menor en España, la Audiencia Provincial de Burgos dictó un auto en el que advertía de algún modo a las partes, entre otras cosas, que habían de evitar la formulación de preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tuviesen relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que se consideren, excepcionalmente, que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima.

E.2. El derecho a la privacidad de la víctima

La VRD subraya también la importancia de la protección a la intimidad de la víctima. Así, el derecho nacional debe garantizar que las autoridades competentes puedan adoptar durante el proceso penal medidas adecuadas para proteger la intimidad de la víctima, sus características personales e imagen. De hecho, también prevé que, dentro del respeto a las libertades de expresión e información, los EEMM insten a los medios⁷³ de comunicación a adoptar medidas de autorregulación con el fin de proteger la intimidad, la integridad y los datos personales de las víctimas.

En general los EEMM se han preocupado en los últimos años por estas cuestiones. Sin embargo, a menudo en la práctica las víctimas de delitos sexuales siguen sufriendo serios menoscabos en su privacidad. En Grecia, según algunos de los operadores entrevistados, no es raro que los nombres de las víctimas aparezcan publicados en los medios de comunicación. En general, en ES la protección de datos de las resoluciones judiciales no constituye un problema. Desgraciadamente, sin embargo, ocurrió en la publicación de la sentencia del caso de “la manada de Pamplona”. Lo que provocó una investigación interna en el CGPJ. La Comisión permanente del CGPJ concluyó en un informe que el fatídico incidente se produjo, entre otros motivos, por: la urgencia en la comunicación de

⁷³ Recomendación Rec (2006)8 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre asistencia a víctima del delito, 14 de junio de 2006.

la sentencia; la falta de medios técnicos que facilitaran la disociación de datos; y, la ausencia de medidas de seguridad adicionales que impidieran acceder al contenido íntegro de la resolución⁷⁴. La Agencia española de Protección⁷⁵ de datos impuso a la empresa responsable de una página web una multa de 50.000 euros por publicar los datos de la víctima.

En ese camino constante en la mejora de la protección de la intimidad de la víctima, la guía de buenas prácticas en la puesta en práctica de la Directiva sugería a los EEMM prestar especial atención a la información que los expedientes judiciales recogen de la víctima, que sólo se entregase al acusado la información de la víctima que sea estrictamente relevantes para el caso y que debería estudiarse unas directrices que guiasen a los profesionales⁷⁶ en estrecho contacto con la víctima, la escena del crimen o el expediente del caso en sus contactos con los medios de comunicación.

G. Los derechos de la víctima y los tempos del procedimiento: la espera y la duración

El tiempo es otra de las variables que afecta negativamente a la protección, seguridad y dignidad de la víctima, y conduce a una revictimización ineludible. En los tres países, desafortunadamente, los procesos penales se alargan durante años, y durante ese tiempo las víctimas no siempre tienen el apoyo ni la información que necesitan para no sentir un alto grado de incertidumbre e indefensión ante la situación.

Teniendo en cuenta el conjunto de factores que amenaza alguno o varios de los elementos incluidos bajo el paraguas de *protección de la víctima* (seguridad, dignidad, no confrontación), parece necesario tomar ciertas medidas en los tres sistemas de justicia criminal (ES-GR-IT) que garanticen esa protección:

- Reducir la duración de los procesos penales agilizándolos, y para ello es ineludible invertir en recursos humanos cualificados, y en la formación y actualización de la formación de los operadores de los distintos ámbitos que se ven implicados en los casos de violencia sexual (policías, jueces, magistrados, abogados, fiscales, médicos, psicólogos, asistentes sociales, etc.).
- Constituir unidades especializadas en delitos de violencia sexual, en donde se trabaje de manera multidisciplinar e integrada los diferentes aspectos que incluyen este tipo de delitos: legal (policial, judicial y forense), médico, psicológico y asistencial en las diferentes áreas en las que necesitan ser asesoradas las víctimas (por ej., ayudas económicas, gestión burocrática, etc.).
- Elaborar protocolos estandarizados y que se apliquen a nivel nacional.
- Garantizar el anonimato de las víctimas.
- Dotar de medios materiales adecuados que garanticen la intimidad para la víctima.

⁷⁴ Informe del Consejo General del Poder Judicial, el 11 de noviembre de 2018.

⁷⁵ Agencia Española de Protección de Datos, procedimiento nº PS/00139/2019.

⁷⁶ Agentes de policía, peritos médicos judiciales, personal médico de urgencias, etc.

- Priorizar temporalmente las investigaciones por delito sexual y especialmente aquellas en las que las víctimas sean más vulnerables (menores de edad y jóvenes, personas con diversidad funcional, migrantes, etc.).
- Regulación del tratamiento procesal del delito sexual análogo al de la violencia de género entre parejas o exparejas: detención y puesta a disposición judicial, competencia judicial, policial y fiscal especializada, etc.

4.4. La indemnización por parte del infractor o la compensación/ayuda por parte del Estado

A. Cuestiones generales

La VRD recoge el derecho a obtener una decisión relativa a la indemnización por parte del infractor en el curso del proceso penal (art. 16). Una disposición especialmente importante en el contenido y en la forma.

En lo que al *fondo* se refiere y en el ámbito que ahora nos ocupa, las víctimas de delitos sexuales, el legislador europeo establece que, con carácter general en el curso del procedimiento penal por tales hechos, las víctimas deben poder obtener una decisión sobre la indemnización por parte del infractor, excepto cuando el Derecho nacional determine que la decisión sobre esa indemnización se adopte en otro procedimiento judicial.

Ahora bien, también es preciso destacar *los términos* utilizados por el legislador; y es que no se trata sólo de un reconocimiento de derechos, sino de la obligación de los EEMM de “garantizar” y de “promover”. En palabras de la VRD, los EEMM son *responsables* de que sus legislaciones *garanticen* a la víctima, con carácter general, el derecho a obtener en el proceso penal una decisión sobre la indemnización, salvo que según el Derecho nacional en cuestión esa decisión corresponda a un procedimiento judicial distinto del que penalmente se haya abierto a tales efectos. Y no sólo eso, sino que el legislador europeo marca, de forma más o menos expresa, a los EEMM una política activa cuando advierte que “promoverán medidas” para que el autor de la infracción indemnice “adecuadamente” a la víctima.

A tenor de los informes nacionales RE-TREAT, la realidad práctica sobre la indemnización a víctimas de delitos sexuales en los tres países parece muy lejana al estándar que prevé el legislador europeo⁷⁷.

Las víctimas de delitos sexuales pueden solicitar una indemnización por parte del infractor en los tres EEMM. Sin embargo, mientras en Italia y España, las víctimas de delitos sexuales pueden obtenerla en el curso del procedimiento penal, en Grecia la posibilidad de obtener esa indemnización por parte del agresor queda relegada a un proce-

⁷⁷ Un problema común en otros EEMM, vid. FAIRCOM, Reports. *Fair and Appropriate? Compensation of Victims of Sexual Violence in EU Member States: Greece, Italy, Latvia, the Netherlands and Spain*. Part I. Part I: A survey of State and Offender Compensation. Part. II. State and Offender Compensation: Survey, Good Practices and Recommendations, 2020.

dimiento civil autónomo⁷⁸. En ese sentido, la configuración procesal italiana y española para la obtención de una indemnización de delitos sexuales se ajusta más que la griega al modelo en el que piensa el legislador europeo. Recordemos que la Guía que publicó la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea relativa a la VRD invitó a expresamente a los EEMM a desarrollar fórmulas⁷⁹ que permitan a la víctima del delito reclamar la indemnización contra el ofensor también en el proceso penal, en lugar de remitirlas y posponerlas a un procedimiento civil posterior.

Sin embargo, la posibilidad de ejercitar la acción civil en el procedimiento penal también presenta notables diferencias en España e Italia. En Italia, la víctima puede ejercitar únicamente la acción civil como una parte civil. Sin embargo, en España la acción penal⁸⁰ y la acción civil corresponden tanto a la víctima como al Ministerio Fiscal; la singularidad del proceso penal español en cuanto a la acción civil es que el MF debe ejercitar esa acción civil, junto a la penal, salvo en dos casos excepcionales: i) que la víctima haya renunciado a la acción civil; o ii) se la haya reservado para ejercitarla en un proceso civil posterior.

Dejando esa cuestión a un lado, la *indemnización adecuada* a las víctimas de delitos sexuales no parece en la práctica, a juzgar por las entrevistas, *efectiva*. Las entrevistas y la encuesta realizadas en el marco del proyecto RETREAT muestran una opinión muy negativa sobre este particular. En España, de los 61 profesionales⁸¹ involucrados en el sistema de justicia penal en este ámbito, a quienes se les preguntó sobre si la víctima de un delito sexual era compensada, reveló una opinión insatisfactoria de 2,29 en la escala Likert. Un resultado que varía significativamente si desagregamos esa opinión según la filiación del entrevistado. Y es que curiosamente los abogados y las asociaciones de víctimas tienen una opinión sobre la compensación a las víctimas peor que la de los policías, la judicatura o el MF; 1,8 en la escala Likert de los primeros frente a los 2,59 de los segundos o, incluso la de los médicos que atienden inicialmente a la víctima de un delito sexual (2,89 en la escala Likert). A falta de un estudio más amplio, una posible lectura de la oscilación entre la opinión de unos y otros, podría ser que la negativa percepción de la compensación a la víctima se agudiza entre los profesionales (abogados, servicios de atención y asociaciones) que mantienen un contacto más estrecho y periódico con la víctima que aquellos cuyos roles institucionales les distancian de ellas (jueces y fiscales) o tienen un contacto más puntual con ellas y más desvinculado del proceso final (policía y médicos). En Grecia, los entrevistados también se mostraban críticos con la compensación a las víctimas de delitos sexuales, entre completamente insatisfechos o poco satisfechos.

Los problemas que se esconden detrás de la compensación a víctimas de delitos sexuales son muchos y variados. Algunos *generales* están estrechamente relacionados con

⁷⁸ Vid. *Italy, Latvia, the Netherlands and Spain*. Part I. Part I: A survey of State and Offender Compensation. Part. II. State and Offender Compensation: Survey, Good Practices and Recommendations, 2020.

⁷⁹ Nota a pie 39, § 56 de la Guía del 19 de diciembre de 2013 de la Dirección General de Justicia sobre la trasposición e implementación de la VRD.

⁸⁰ La víctima puede personarse como acusación particular autónoma y no supeditada al Ministerio Fiscal.

⁸¹ Vid. Poder Judicial, Ministerio Fiscal, abogados, cuerpos de policía, servicios médicos, servicios para las víctimas y asociaciones de las víctimas.

los factores⁸² que caracterizan este tipo de delitos (vid. cifras negras delito, baja tasa de condenas, etc.). Otras circunstancias son más específicas, asociadas a las particularidades procesales de cada EM (p.ej. en Grecia donde las víctimas deben acudir a un proceso civil específico).

B. La indemnización de la víctima a cargo del agresor

Más allá de las distintas vías que tiene la víctima para poder obtener una indemnización por parte del infractor, en el mismo procedimiento penal o, potestativa o imperativamente, en otro procedimiento civil, la indemnización a la víctima por parte del infractor suscita otros problemas. Por un lado, su *cuantía* o, más concretamente, los parámetros y fórmulas que sirven para su determinación. Por otro lado, las dificultades el *cobro efectivo* de la indemnización establecida.

En ninguno de los tres países existen datos oficiales sobre la cuantía y sobre el cobro efectivo de esa indemnización. Sin embargo, en España en la última década en el marco de distintos proyectos, se han realizado estudios de campo que ofrecen datos muy interesantes sobre este particular. En Italia y Grecia⁸³ no se han encontrado estudios representativos sobre este particular.

En España, el estudio de campo realizado en el marco del proyecto RE-TREAT⁸⁴ entre 2014-2018 sobre una muestra de 2.265 sentencias de delitos sexuales nos arroja los siguientes resultados. Por un lado, las sentencias judiciales reconocen indemnizaciones a víctimas de delitos sexuales en más casos y por una cuantía ligeramente superior cuando la víctima del delito sexual es menor que cuando es adulta. Con todo, las cifras son relativamente similares. Frente al 70% de los casos en los que se reconoce una indemnización a víctimas de delitos sexuales menores y por un importe medio de 16.507 euros, cuando la víctima es adulta la indemnización se reconoce en el 64% de los casos y por una cifra media de 16.330 euros. Otro estudio elaborado por SOLETO MUÑOZ y GRANÉ en una muestra más amplia de 2.763 sentencias en una serie temporal anterior (2012-2015) muestra una indemnización media algo inferior (13.700 euros). También un estudio de campo previo de TAMARIT⁸⁵ y otros sobre una muestra de 2.421 casos de delitos sexuales contra menores entre 2011-2014 muestra una indemnización media de 13.532 euros.

⁸² Nos remitimos al epígrafe 3.2 de este Informe en donde se ilustra en cifras el estado de la cuestión en los tres países.

⁸³ En el caso de Grecia, el Informe II FAIRCOM se remite a una muestra que sólo alcanza 7 sentencias civiles en el lustro comprendido entre 2011-2016 con cuantías dispares que oscilan entre los 3.000 € por un acoso laboral a una víctima adulta y los 250.000 € por delitos sexuales contra una víctima menor de 10 años por parte de su progenitor.

⁸⁴ Vid. Informe español RE-TREAT.

⁸⁵ TAMARIT, J.P.; GUARDIOLA, M.J.; HERNANDEZ- HIALGO, P.; PADRO-SOLANET, A., “La victimización sexual de menores de edad: un estudio de sentencias”, *Revista Española de Investigación Criminológica*, n. 12, 2014.

Pero, como adelantábamos, la declaración de una indemnización a cargo del infractor y en favor de la víctima no conlleva efectivamente la obtención de la indemnización. Lejos de eso, las víctimas de los tres EEMM que obtienen esas indemnizaciones sobre el papel se enfrentan en la mayoría de los casos a infractores que no pagan voluntariamente, que se resisten al pago, que ocultan sus bienes o simplemente que son insolventes. De una forma u otra la víctima comienza un nuevo periplo de trámites en la búsqueda de bienes en los que poder hacer efectiva la cantidad. En teoría, el EM puede perseguir al delincuente si no paga la indemnización, pero en la práctica recae sobre la víctima esta carga, quien casi tiene que salir en búsqueda de los bienes que pueda tener el infractor sobre los que ejecutar la indemnización. Otra cuestión diferente es si esas víctimas podrían obtener una indemnización en el contexto de alguna forma de justicia restaurativa⁸⁶.

El resultado es que la víctima no recibe la indemnización o sólo recibe una ínfima parte y, en cualquier caso, lo hace tarde y después de muchísimo esfuerzo. En España algunos de los estudios anteriormente citados descubrieron que un 1/3 de las víctimas no recibió compensación alguna y otro 1/3 sólo recibió parte de ella⁸⁷. Según este mismo estudio, la víctima apenas recibe el 1,2% de la indemnización efectivamente concedida; es decir, una media de 166 euros de una indemnización media estimada de 13.700 euros⁸⁸. En muchos casos el Tribunal adapta el pago de la indemnización a la capacidad económica del responsable civil, fraccionándola en plazos y cantidades muy pequeñas (p.ej. 10 euros mensuales) y facilitando así que el condenado pueda cumplir periódicamente. Sin embargo, diversos operadores jurídicos entrevistados subrayan el impacto que en la víctima tiene este pago a plazos, al obligarla a tener que ir periódicamente al Juzgado y al banco a retirar una cantidad muy baja y rememorar todo.

En definitiva, la indemnización acaba convirtiéndose en otro elemento de revictimización a lo largo de todo el procedimiento, desde la solicitud, la valoración y el cálculo, hasta el efectivo cobro. En primer lugar, la defensa del acusado y algunos sectores de la sociedad acusan con relativa frecuencia a la víctima de buscar un fin espurio, el dinero. De hecho, en España algunos de los letrados de las víctimas explicaron que para evitar esas críticas no hacen una petición autónoma sobre la acción civil, sino que se adhieren a la solicitud del Ministerio Fiscal; algo que también confirmaron algunas fiscales entre-

⁸⁶ Una oportunidad planteada en la Guía del 19 de diciembre de 2013 de la Dirección General de Justicia sobre la trasposición e implementación de la VRD. Vid. recomendación prevista en el §46 relativa al art. 12 y considerando 49, pp. 33-34: “De hecho, el uso de los servicios de justicia reparadora tiene un vínculo importante con la indemnización del delincuente a la víctima (como alternativa o complemento a la indemnización económica)”.

⁸⁷ MUÑOZ, H. et. al. GRANÉ CHÁVEZ, A., *La eficacia de la reparación a la víctima en el proceso penal a través de las indemnizaciones: Un estudio de campo en la Comunidad de Madrid*, Madrid, Dykinson, 2018. De acuerdo con el estudio un 33% sí obtuvo la indemnización.

⁸⁸ SOLETO MUÑOZ et. al. GRANÉ CHAVEZ el estudio de 2012-2017, vid. “El proceso penal, mecanismo ineficaz de compensación a la víctima: un estudio de campo”, *Revista de Victimología*, pp. 35-80. También, SOLETO MUÑOZ, H., “La ineficacia del sistema de justicia español para reparar económicamente a las víctimas de violencia sexual: un espacio para la justicia restaurativa”, en *Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico*, Nº. 26, 2019, pp. 320-34

vistadas. Por otro lado, la valoración y cálculo de esa indemnización no es sencilla para el Tribunal; y finalmente el cobro de la indemnización vuelve a convertirse en un calvario para muchas víctimas.

C. Posibilidad de una compensación o ayuda a cargo del Estado

Los tres EEMM contemplan la posibilidad de que las víctimas de delitos sexuales puedan solicitar una compensación a cargo del Estado; en los tres países se articula como una vía *subsidiaria* para el caso en que la indemnización no pueda hacerse efectiva en la persona del agresor. La práctica, sin embargo, demuestra que esta posibilidad es extremadamente excepcional por distintas razones.

Por un lado, la configuración subsidiaria de este mecanismo, que sólo parece abrirse como la última posibilidad y después de sucesivos procedimientos largos y complejos (una vez que el procedimiento penal ha concluido con una resolución firme sobre ese pronunciamiento, que normalmente sólo llega después de la condena firme, le sigue el intento de hacer efectiva esa indemnización contra el patrimonio del responsable civil -normalmente el condenado- y, por último, la solicitud concreta de esa indemnización a cargo del Estado que abrirá un procedimiento administrativo, cuya resolución también podría ser impugnada en la vía jurisdiccional).

Por otro lado, la cuantía de la indemnización a cargo del Estado es distinta de un país a otro, variable o fija (ES e IT). Sea como fuera, variable o fija, en la mayoría de los casos la cuantía es indudablemente pequeña para compensar de algún modo los daños y perjuicios de una víctima de un delito sexual. En España, la compensación estatal tiene un tope de 2.689 euros y solo compensa tratamiento terapéutico. En Italia, una reforma en 2020 la elevó de 4.800 euros a 25.000 euros.

Precisamente sobre la compensación del Estado en un delito de agresión sexual encontramos la reciente STJUE, Gran Sala, de 16 de julio de 2020⁸⁹. En esta sentencia, el TJUE se pronunció sobre si la cuantía de la compensación a cargo del Estado italiano podía considerarse una *indemnización justa y adecuada* a los efectos de la Directiva 2004/80. El TJUE recordó que esa *indemnización justa y adecuada* a cargo del Estado no debe necesariamente corresponderse con el resarcimiento de daños y perjuicios que, a cargo del autor de un delito doloso violento, cabe reconocer en favor de la víctima de tal delito. En otras palabras, la indemnización estatal no necesariamente tiene que garantizar

⁸⁹ Vid. STJUE: ECLI:EU:C:2020:566, y las conclusiones del Abogado General Bobek, 14 de mayo de 2020, en el asunto C-129/19 *Presidenza del Consiglio dei Ministri*. ECLI:EU:C:2020:375. que resolvió una cuestión prejudicial planteada por la Corte de Casación italiana, relativa a la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la indemnización a las víctimas de delitos violentos. Y, en concreto sobre dos extremos que se plantearon subsidiariamente. En primer lugar, sobre el ámbito subjetivo de aplicación de la Directiva y, en particular si ésta puede aplicarse también a las víctimas de delitos violentos en casos no fronterizos; y, en segundo lugar, sobre el concepto de indemnización *justa y adecuada*. El TJUE se pronunció expresamente sobre la primera y sólo implícitamente sobre la segunda.

una reparación completa del daño material y moral sufrido por la víctima. Y por otra parte, el Tribunal de Luxemburgo afirmó que corresponde al juez nacional garantizar, a la luz de las disposiciones nacionales que establezcan el régimen de indemnización, *que la cantidad concedida a la víctima de un delito doloso violento* constituye una «indemnización justa y adecuada».

Ahora bien, el TJUE también subrayó unas consideraciones que podrían entenderse como pautas útiles en la interpretación de la citada Directiva y de las normas nacionales de los EEMM que prevean esa indemnización estatal. Así: i) Un EM excedería el margen de apreciación que le reconoce la Directiva si su normativa nacional previera una *indemnización a las víctimas de delitos dolosos violentos puramente simbólica o manifestamente insuficiente en relación con la gravedad de las consecuencias*; y ii) La indemnización reconocida a esas víctimas supone *una contribución a la reparación del perjuicio material y moral que han sufrido*. Tal contribución puede considerarse «justa y adecuada» *si compensa, en una medida adecuada, el padecimiento de aquellas*. Y, en particular, en relación con el régimen italiano (anterior a la reciente reforma de 2020) de indemnización de las víctimas de delitos dolosos violentos: la indemnización a las víctimas puede establecerse a tanto alzado porque la cantidad o suma puede variar en función del tipo de delito sufrido. Pero que el EM que opte por tal régimen de indemnización debe asegurarse de que el baremo de indemnizaciones sea suficientemente detallado, de modo que se evite que la indemnización a tanto alzado prevista para un determinado tipo de delito pueda resultar, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, manifestamente insuficiente. Y concluyó en lo que aquí nos importa: que las agresiones sexuales son, de entre los delitos dolosos violentos, de los que llevan aparejadas consecuencias más graves para las víctimas. Y que, sin perjuicio de la comprobación que corresponde al órgano judicial nacional, *el importe a tanto alzado de 4.800 euros para indemnizar a una víctima de un acto de agresión sexual*⁹⁰ *no parece a primera vista una indemnización justa y adecuada*. Seis meses antes de la citada STJUE, Italia modificó (febrero 2020) su normativa cuantificando en la actualidad que la indemnización a cargo del Estado a las víctimas de delitos sexuales violentos en 25.000 euros⁹¹, salvo que el delito sea de menor gravedad.

Al problema de la cuantía se une el insuficiente conocimiento o, incluso, la ignorancia sobre esta cuestión de muchos de los profesionales jurídicos que trabajan o colaboran con el sistema de justicia penal. Pej. en las entrevistas realizadas a la judicatura en Italia, la inmensa mayoría *jueces entrevistados declararon abiertamente que desconocían la posibilidad de una indemnización por parte del Estado*. Un escenario ante el que cabe preguntarse entonces cómo puede respetarse el derecho de las víctimas a recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente; y es que hemos de recordar que la información de los derechos es un *prius* lógico para que la víctima pueda ejercitarlos; y, entre esos derechos, está el modo y las condiciones para poder acceder a indemnizaciones (vid. letra e, del art. 4.1).

⁹⁰ Decreto del Ministro de Interior de 31 de agosto de 2017.

⁹¹ Una cantidad a la que pueden añadirse hasta otros 10.000 euros en concepto de gastos médicos.

Por unas razones u otras, la mayoría de las víctimas no solicitan esa compensación del Estado y, cuando lo hacen, la tasa de desestimación es elevadísima. P.ej. a tenor del informe FAIRCOM, hasta la fecha el Estado heleno no ha otorgado una compensación de este tipo⁹²; concretamente, en 2019 sólo 10 víctimas solicitaron esta compensación y todas fueron denegadas. En ES, la tasa de estimación de la compensación estatal a víctimas de delitos sexuales es baja y, dependiendo de la fuente, varía entre un 13-20%. De acuerdo con el Ministerio de Economía durante las dos décadas comprendidas entre 1998-2018 se registraron un total de 1356 solicitudes de víctimas y sólo se concedieron un 20% (total, 272 solicitudes); es decir que anualmente una media de 67 víctimas de delitos sexuales solicitan una compensación del Estado y apenas se concede en 13 de estos casos. Sin embargo, un reciente estudio de campo efectuado por SOLETO MUÑOZ⁹³ pone de relieve una tasa de denegación algo superior, en torno al 87%. En la misma línea, una abogada italiana con una experiencia amplísima en este ámbito reconocía que nunca había tenido una víctima que hubiese obtenido una indemnización a cargo del Estado Italiano; y reconocía que la estructura de incentivos era disuasoria, y que al final ni siquiera intentaban esa posibilidad porque como los criterios y parámetros eran tan estrictos, y en el mejor de los casos, si se admitía la solicitud, la cuantía fija era baja (al menos hasta la reforma de 2020), no compensaba pedirla.

4.5. Ausencia de Justicia Restaurativa

La Justicia reparadora⁹⁴ es, en palabras de la VRD, cualquier proceso que permita a la víctima y al infractor participar activamente, si dan su consentimiento libremente para ello, en la solución de los problemas resultantes de la infracción penal con la ayuda de un tercero imparcial. La VRD opta por una definición amplia (vid. “cualquier proceso...”), en lugar de restringirla o encorsetarla en una fórmula específica de justicia reparadora. La Justicia restaurativa puede adoptar distintas fórmulas; se citan, entre otros, la mediación entre víctima e infractor, las conferencias de grupo familiar y los círculos de sentencia.

El legislador europeo reconoce lo importantes que puede ser para la víctima la justicia reparadora, pero también advierte del peligro de revictimización, intimidación o represalias que a su vez pueden conllevar. Por eso, las prioridades de los servicios de Justicia Restaurativa son: i) satisfacer los intereses y necesidades de la víctima; ii) reparar el perjuicio que se le haya ocasionado; iii) impedir cualquier otro perjuicio adicional.

⁹² II Report FAIRCOM, *Fair and Appropriate? Compensation of Victims of Sexual Violence in EU Member States: Greece, Italy, Latvia, the Netherlands and Spain*. State and Offender Compensation: Survey, Good Practices and Recommendations, 2020, p. 29

⁹³ De acuerdo con el estudio de campo de las 85 solicitudes de 2018 sólo se estimaron 11. SOLETO MUÑOZ, H., “La ineficacia del sistema de justicia español para reparar económicamente a las víctimas de violencia sexual: un espacio para la justicia restaurativa”, *Teoría y Derecho*, n.26, 2019, p. 330.

⁹⁴ Vid. considerandos 9, 21, 46, 61, 64 de la VRD.

Los peligros de revictimización y otros perjuicios tratan de prevenirse a través de distintas vías. Por un lado, *formación especializada* de las autoridades y demás operadores jurídicos y no jurídicos que tratan con víctimas (jueces, fiscales, abogados, restantes profesionales que prestan apoyo a las víctimas o que trabajan en el ámbito de la Justicia Reparadora). Por otro lado, la VRD prevé algunas vías a modo de ejemplificación abierta a *factores* que deben tomarse en consideración a la hora de derivar⁹⁵ un asunto concreto a un servicio de Justicia Reparadora, o de iniciar efectivamente un proceso restaurativo, por si pudiesen reducir una elección voluntaria y consciente o, incluso, generarles un perjuicio a las víctimas. Entre esos factores se encuentran: la naturaleza y la gravedad del delito; el grado de daño causado; la violación repetida de la integridad física, sexual o psicológica de una víctima; los desequilibrios de poder; la edad, madurez o capacidad intelectual.

Junto a lo anterior, la VRD recoge expresamente el derecho de las víctimas a que esa justicia reparadora se desarrolle con *garantías* y, por tanto, en un entorno seguro. Un escenario que, como mínimo, ha de cumplir las siguientes condiciones. En primer lugar, que el recurso a un procedimiento de Justicia restaurativa esté supeditado a que pueda redundar en interés de la víctima y se desarrolle en condiciones de seguridad para ella; y, por tanto, que ésta sea informada efectivamente del procedimiento concreto y consienta libremente participar, así como retirarse en cualquier momento. Por eso, el consentimiento debe ir precedido de una información completa e imparcial sobre el proceso concreto de justicia restaurativa que se presente, sus posibles resultados y los instrumentos de supervisión de todo acuerdo. La VRD exige también que el infractor haya reconocido los *hechos* (elementos fácticos) del caso. Y, por supuesto, que cualquier acuerdo resulte de forma voluntaria⁹⁶.

Los informes nacionales (ES-GR-IT) de RE-TREAT (también exploraron el nivel de conocimiento que los profesionales que trabajan en el sistema de justicia criminal tienen de la *Justicia Restaurativa*, así como la existencia o no de programas de Justicia Restaurativa en su país y, en concreto, su opinión sobre la posible aplicación en el ámbito de delitos sexuales; en ES, también se preguntó a las víctimas.

Desafortunadamente en Italia y Grecia no parece haber programas de Justicia Restaurativa implantados de manera sistemática, la mayoría se reducen al ámbito de la delincuencia juvenil. De hecho, el conocimiento teórico y práctico de la Justicia Restaurativa entre los profesionales italianos y griegos puede calificarse de nulo, deficiente y, en ocasiones errático. En España los operadores parecen tener un mejor nivel de conocimiento de la Justicia Restaurativa, al menos en términos teóricos.

En Italia, excepto los abogados, todos los operadores entrevistados (carabinieri, fiscales, jueces e incluso servicios de víctimas) reconocieron su ignorancia sobre la Justicia Restaurativa y sobre la existencia de programas concretos. En esa línea, p.ej., los fiscales subrayaron que en términos generales el concepto de Justicia Restaurativa es un absoluto desconocido, los carabinieri identificaban en términos limitados la Justicia Restaurativa exclusivamente con la mediación penal, los jueces subrayaron que no existía regulación

⁹⁵ La VRD prevé que los EEMM faciliten la derivación de casos a servicios de Justicia Restaurativa cuando se den las circunstancias adecuadas; estableciendo incluso protocolos, directrices y guías sobre la derivación.

⁹⁶ Y que podrá ser tenido en cuenta en otro proceso penal.

al respecto, indicando en cierto modo que sería un instrumento sin cobertura legal. Los abogados fueron los únicos que revelaron tener algunas nociones de Justicia Restaurativa y, a veces, alguna experiencia; pero subrayaban que en la práctica se reducían al ámbito de la Justicia penal juvenil. De hecho, preguntados sobre su potencialidad en otros ámbitos, todos recalcaron que la Justicia Restaurativa⁹⁷ debería, a su juicio, estar prohibida en algunos ámbitos y que, precisamente, la violencia de género, la violencia contra la mujer, los delitos sexuales deberían ser uno de ellos.

El nivel de conocimiento de la Justicia Restaurativa y, en su caso, implementación de algún programa específico, tampoco es mejor en Grecia. Una reciente investigación (Artemis 2020⁹⁸) conforma que sobre la mediación penal se encuentra todavía en un estadio muy embrionario en Grecia. De hecho, el estudio cualitativo muestra opiniones absolutamente dispares. Pej. mientras un abogado afirma que se aplica muy pocas veces y que no existen protocolos sobre Justicia Restaurativa, otro mantiene que es frecuente que el SJP recurra a distintas formas de Justicia Restaurativa, que normalmente son las víctimas quienes lo solicitan y que, en ese caso, existen instrucciones sobre su aplicación.

En España los operadores parecen tener un mayor nivel de conocimiento de la Justicia Restaurativa, al menos en términos teóricos. En la práctica su implementación es dispar dependiendo de la edad del imputado. En el proceso penal de menores, la mediación es un instrumento absolutamente generalizado y consolidado. Sin embargo, en el proceso penal frente a un adulto el desarrollo de la justicia restaurativa es más limitado; con todo, las experiencias, proyectos e iniciativas parecen ser cada vez más frecuentes y exitosas. En especial desde que el legislador recogiera expresamente en 2015 algunas referencias concretas (vid. el cumplimiento del acuerdo de mediación como motivo de suspensión de la pena en el art. 84.1 del CP español; o el art. 15 Ley española estatuto de la víctima prevea como objetivo de la justicia restaurativa el que la víctima obtenga la adecuada reparación material y moral). Ahora bien, en la práctica general, al igual que ocurre en Italia y Grecia, los operadores *jurídicos* españoles (jueces, fiscales, abogados, etc.) parecen también bastante desconectados o lejanos de la realidad de la Justicia Restaurativa. Quizá, de todos los operadores jurídicos, la abogacía parece tener una actitud más abierta y/o favorable a la Justicia Restaurativa, en especial en fase de ejecución de sentencia; sin embargo, en la mayoría de los casos, los abogados reconocen que sólo informan a la víctima sobre instrumentos de justicia restaurativa cuando ella se lo solicita.

La eventual posibilidad de prever programas de Justicia Restaurativa en el ámbito de los delitos sexuales que ahora nos ocupan parece muy lejana en los tres países; de acuerdo con los informes nacionales, parece más bien que las víctimas se acogen a este tipo de programas de manera muy excepcional. De hecho, ninguna de las víctimas entrevistadas (ES) ha participado en un programa de *justicia reparadora*, ni conocían su existencia.

⁹⁷ Una de las respuestas de los abogados es muy ilustrativa: “me opondría con uñas y dientes a este tipo de intervención, sin control con una víctima que no esté suficientemente preparada”.

⁹⁸ Greece Research Report, ARTEMIS, 2020, *The Application of the EC Directive 2011/99/EU and The European Protection Order*, p.40. Available at: https://www.artemis-europa.eu/wp-content/uploads/2020/09/ARTEMIS-Research-Report_Greece.pdf

Entre los profesionales jurídicos (Jueces, Fiscales, abogados) entrevistados en los tres países, la simple pregunta se convierte en un tema muy polémico. Sin embargo, desde un punto de vista abstracto, la victimización sexual presenta algunas características que podrían poner en valor la utilidad para las víctimas de la Justicia restaurativa en este ámbito⁹⁹, pero indudablemente existen también peligros muy importantes que pueden desaconsejarlo. Entre las circunstancias que podrían hacer oportuna una justicia reparadora pueden encontrarse, entre otras: un volumen importantísimo de casos que no llegan a la justicia tradicional por distintas razones; otro importante número de casos que se resuelve por la justicia convencional, pero por distintas razones no satisface los intereses de las víctimas; la configuración del procedimiento restaurativo, que no cuestiona la credibilidad del relato de la víctima y en el que pueden atenderse mejor sus sentimientos e intereses. Ahora bien, esas bondades no pueden tampoco obviar que el coste potencial de los riesgos derivados de este mecanismo y, en especial, revictimización, manipulación, presión e instrumentalización de la víctima. Especial atención merecen en este sentido los delitos sexuales en el ámbito familiar por su particular dinámica, los desequilibrios inherentes al delito, la actitud manipuladora del agresor, la gravedad y extensión en el tiempo de este tipo de delitos, etc.

La respuesta sobre si la Justicia Restaurativa puede jugar un papel positivo en delitos sexuales no puede ser única ni tampoco absoluta; dependerá del caso concreto y sus circunstancias. Cualquier eventual posibilidad debería cumplir los siguientes requisitos: i) los profesionales que intervengan en ese procedimiento restaurativo tengan una formación suficiente, una experiencia dilatada y estén en todo caso especializados en victimización sexual, como exige el Manual de la ONU de Justicia Restaurativa¹⁰⁰; ii) la víctima sea mayor de edad; iii) haya transcurrido el tiempo suficiente tras la agresión.

⁹⁹ Una visión general de la creciente bibliografía sobre este tema, OLALDE ALTAREJOS, A. J., “Caminos restaurativos en victimización grave”, en Varona Martínez, G. (Ed.), *Caminando restaurativamente. Pasos para diseñar proyectos transformadores alrededor de la justicia penal*. Madrid: Dykinson, 2020, pp. 135-146. TAMARIT SUMALLA, J.M., “Abusos sexuales en la Iglesia Católica: ¿cómo responder a las demandas de justicia?”, *Nuevo Foro Penal*, 91, 2018, pp. 11-42. ZINSSTAG, E., & KEENAN, M. (Eds.), *Restorative responses to sexual violence*. New York: Routledge, 2017. MARSH, F., & WAGER, N. M., “Restorative justice in cases of sexual violence: Exploring the views of the public and survivors”, *Probation Journal*, 62(4), 2015, 336-356. MERCER, V., & STEN MADSEN, K., *Doing restorative justice in cases of sexual violence: A practice guide*, Leuven: Leuven Institute of Criminology, 2015. KEENAN, M., ZINSSTAG, E., “Restorative Justice and Sexual Offences: Can ‘changing lenses’ be appropriate in this case too?”, *Monatsschrift für kriminologie und strafrecht*, 97(1), 2014, dedicated to Developing Sexual Offender Laws and Treatment in Europe. Legal trends and new paths in treatment strategies for sexual offender, pp. 93-106.

¹⁰⁰ Vid. la 2ª edición del Manual de Naciones Unidas de programas de Justicia Restaurativa de 2020, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf. La doctrina también es pacífica en esa especialización, véase entre otros, VARONA MARTÍNEZ, G., “Adecuación de los procesos restaurativos en delitos de carácter sexual”, *Justicia restaurativa y terapéutica: Hacia innovadores modelos de justicia*, (Dir. de la Cuesta y Subijana), Valencia: Tirant, 2017, pp. 368-389; STUBBS, J. “Relations of Domination and Subordination: Challenges for Restorative Justice in Responding to Domestic Violence”. *UNSW Law Journal* 33, n.3, 2010, pp. 970-986; SOLETO MUÑOZ, H., “La ineficacia del sistema de justicia español para reparar económicamente a las víctimas de violencia sexual: un espacio para la justicia restaurativa”, *Teoría y Derecho*, n.26, 2019, pp. 320-341.

Por tanto, es imperiosa la necesidad de especialización de los servicios de Justicia Restaurativa en victimización sexual. Es importante no desatender este tipo de servicio, ya que todas las víctimas entrevistadas (ES-GR) subrayan que se sienten socialmente sancionadas. La víctima de un delito de agresión sexual siente que carga con un estigma social; saben que objetivamente no son culpables de lo que les ha ocurrido; pero, sin embargo, no pueden evitar ese sentimiento. Por eso ocultan su condición de víctima de violencia sexual y, cuando deciden o tienen que contarlo, justifican el por qué les ha ocurrido a ellas para que su interlocutor (ya sea un profesional, o un familiar, o un allegado) no les atribuya responsabilidad de lo sucedido. En general, las víctimas y los operadores jurídicos se quejan de la poca educación y concienciación social respecto a las mujeres víctimas de violencia sexual. Reclaman la necesidad de acabar con los estereotipos y el uso de lenguaje sancionador y cuestionador (tanto por parte de los profesionales como de la sociedad), y dar visibilidad también a los delitos de violencia sexual, pero garantizando su privacidad. En España, las víctimas de delitos sexuales se quejan también de cierta invisibilidad en comparación con las víctimas de violencia de género.

Estructura y resumen Directiva 2021/29/UE.

Capítulo	Art.	Contenido
Disposiciones generales	1-2	Objetivos y definiciones
Información y apoyo	3	Derecho a entender y a ser entendido
	4	Derecho a recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente
	5	Derecho de las víctimas cuando interpongan una denuncia
	6	Derecho a recibir información sobre su causa
	7	Derecho a traducción e interpretación
	8-9	Derecho de acceso a los servicios de apoyo a las víctimas
Participación en el proceso penal	10	Derecho a ser oído
	11	Derechos en caso de que se adopte una decisión de no continuar el procesamiento
	12	Derecho a garantías en el contexto de los servicios de justicia reparadora
	13	Derecho a justicia gratuita
	14	Derecho al reembolso de gastos
	15	Derecho a la restitución de bienes
	16	Derecho a obtener una decisión relativa a la indemnización por parte del infractor en el curso del proceso penal
Protección de las víctimas y reconocimiento de las víctimas con necesidad de protección especial	17	Derechos de las víctimas residentes en otro EM
	18	Derecho a la protección
	19	Derecho a evitar el contacto entre víctima e infractor
	20	Derecho a la protección de las víctimas durante las investigaciones penales
	21	Derecho a la protección de la intimidad
	22	Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección
	23	Derecho a la protección de las víctimas con necesidades especiales de protección durante el proceso penal
Otras disposiciones	24	Derecho a la protección de las víctimas menores de edad durante el proceso penal
	25	Formación de los profesionales
Disposiciones finales	26	Cooperación y coordinación de los servicios
	27	Incorporación al Derecho interno
	28	Comunicación de datos y estadísticas

REFERENCIAS

- AHRENS CE, STANSELL J, JENNINGS A. “To tell or not to tell: the impact of disclosure on sexual assault survivors’ recovery”, *Violence and Victims*, 2010; 25(5), pp. 631-48.
- ANDERSON Et al., 2022 - forthcoming’.
- ARTEMIS, 2020, *The Application of the EC Directive 2011/99/EU and The European Protection Order*, Available at: https://www.artemis-europa.eu/wp-content/uploads/2020/09/ARTEMIS-Research-Report_Greece.pdf
- BUTT, D., “We are failing the community of sexual assault victims”, *The Globe and Mail*, 2017.
- DG Justice Guidance document related to the transposition and implementation of Directive 2012/29/EU. Ref. Ares(2013)3763804 - 19/12/2013.
- DOE, J. *The Story of Jane Doe: A book about rape*. Toronto, Vintage Canada. 2004.
- European Project (JUST/2014/RDAP/AG/HARM/) “EU FEM Roadmap forced/early marriage”, 2017, http://femroadmap.eu/FEM_roadmap_ES.pdf
- European Union Handbook of best police practices on tackling violence against women, available at <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%207488%202010%20REV%202/EN/pdf>
- FAIRCOM, Reports. *Fair and Appropriate? Compensation of Victims of Sexual Violence in EU Member States: Greece, Italy, Latvia, the Netherlands and Spain*.
- Part I. A survey of State and Offender Compensation.
- Part. II. State and Offender Compensation: Survey, Good Practices and Recommendations, 2020.
- FISHER, B. S., DAIGLE, L. E., CULLEN, F. T., & TURNER, M. G., “Reporting sexual victimization to the police and others: Results from a national level study of college women”, *Criminal Justice and Behaviour*, 30, 2003, pp. 6-38.
- FRA Report, 2019.
- Gender Equality Index (EIGE, 2020).
- GREVIO Italy Report, 2019.
- GREVIO, Spain Report, 2020.
- GREVIO’s Recommendation, Committee of the Parties to Italy and Spain on the implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence.
- GRUBB, A. & TURNER E., “Attribution of blame in rape cases: a review of the impact of rape myth acceptance gender role conformity and substance use on victim blaming”, *Aggression and Violent Behaviour*, 17, 2012, pp. 443 -452.
- Handbook on Restorative Justice Programmes, 2020. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf.
- JORDAN, J. “Justice for rape victims? The spirit may sound willing but the flesh remains weak”, in *Crime, victims and policy*, London, Palgrave Macmillan, 2015, pp. 84-106.
- KEENAN, M., ZINSSTAG, E., “Restorative Justice and Sexual Offences: Can ‘changing lenses’ be appropriate in this case too?”, *Monatsschrift für kriminologie und strafrecht*, 97(1), 2014, pp. 93-106.
- KOSTER, N.-S. N., KUIJPERS, K. F., KUNST, M. J. J., der LEUN, J. P. V. “Crime victims’ perceptions of police behaviour, legitimacy, and cooperation: A review of the literature”, *Victims & Offenders*, 11(3), 2016, pp. 392-435.

- KOSYFOLOGOU, A., “The gendered aspects of the austerity regime in Greece: 2010-2017”, *Studies Austerity, Gender inequality and Feminism after the crisis*, June 2018.
- LOGAN, T., EVANS, L., STEVENSON, E., & JORDAN, C. E., “Barriers to services for rural and urban survivors of rape”, *Journal of Interpersonal Violence*, 20, 2005, pp. 591-616.
- MAIER, S. L. *Rape, victims, and investigations: Experiences and perceptions of law enforcement officers responding to reported rapes*, New York and London: Routledge, 2014.
- MARSH, F., & WAGER, N. M., “Restorative justice in cases of sexual violence: Exploring the views of the public and survivors”, *Probation Journal*, 62(4), 2015, 336-356.
- MERCER, V., & STEN MADSEN, K., *Doing restorative justice in cases of sexual violence: A practice guide*, Leuven: Leuven Institute of Criminology, 2015.
- MILLER, A.K., HANDLEY, I.M., MARKMAN, K.D. & MILLER, J.H., “Deconstructing self-blame following sexual assault: the critical roles of cognitive content and process”, *Violence against Women*, 16, 2010, pp. 1120-1137.
- MILQUET, J. Report ‘Strengthening victims’ rights: from compensation to reparation’ March 2019, *FRA Reports on Justice for victims of violent crime*, April 2019.
- MONROE, L. M., KINNEY, L. M., WEIST, M. D., DAFEAMEKPOR, D. S., DANTZLER, J., & REYNOLDS, M. W., “The experience of sexual assault: Findings from a state-wide victim needs assessment”, *Journal of Interpersonal Violence*, 20, 2005, pp. 767-777.
- OLALDE ALTAREJOS, A. J., “Caminares restaurativos en victimización grave”, in Varona Martínez, G. (Ed.), *Caminando restaurativamente. Pasos para diseñar proyectos transformadores alrededor de la justicia penal*. Madrid: Dykinson, 2020, pp. 135-146.
- TAMARIT SUMALLA, J.M., “Abusos sexuales en la Iglesia Católica: ¿cómo responder a las demandas de justicia?”, *Nuevo Foro Penal*, 91, 2018, pp. 11-42.
- ORCHOWSKI, L. M., UNTIED, A. S., & GIDYCZ, C. A., “Social reactions to disclosure of sexual victimization and adjustment among survivors of sexual assault”, *Journal of Interpersonal Violence*, 28, 2013, pp. 2005-2023.
- PAGE, A. D., “Judging women and defining crime: Police officers’ attitudes toward women and rape”, *Sociological Spectrum*, 28(4), 2008, pp. 389-411.
- PATTERSON, D., “The linkage between secondary victimization by law enforcement and rape case outcomes”, *Journal of interpersonal violence*, 26(2), 2011, pp. 328-347.
- PEETERS, L. VANDENBERGHE, A., BAVO HENDRIKS, B., GILLES, CH., ROELENS, K. AND KEYGNAERT, I., “Current care for victims of sexual violence and future sexual assault care centres in Belgium: the perspective of victims”, *BMC International Health and Human Rights*, 2019, pp. 19-21.
- RE-TREAT project.
 Greece National Report, 2021, available at: <https://sexualviolencejustice.eu/?lang=es>
 Italy National Report, 2021, available at: <https://sexualviolencejustice.eu/?lang=es>
 Spain National Report, 2021, available at: <https://sexualviolencejustice.eu/?lang=es>
 Also https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3803114
 Spanish version https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3796364
- STARZYNSKI, L. L., ULLMAN, S. E., FILIPAS, H. H., & TOWNSEND, S. M., “Correlates of women’s sexual assault disclosure to informal and formal support sources”, *Violence and Victims*, 20, 2005, pp. 417-432.
- SOLETO MUÑOZ, H. et al, GRANÉ CHÁVEZ, A., *La eficacia de la reparación a la víctima en el proceso penal a través de las indemnizaciones: Un estudio de campo en la Comunidad de Madrid*, Madrid, Dykinson, 2018.

- SOLETO MUÑOZ, H., “La ineficacia del sistema de justicia español para reparar económicamente a las víctimas de violencia sexual: un espacio para la justicia restaurativa”, *Teoría y Derecho*, n.26, 2019, pp. 320-341.
- SPENCER, D., DODGE, A., RICCIARDELLI, R., DALE BALLUCCI, D., “I Think It’s Re-Victimizing Victims Almost Every Time: Police Perceptions of Criminal Justice Responses to Sexual Violence”, *Critical Criminology*, 26, 2018, pp. 189-209.
- SPOHN, C., & TELLIS, K. (2012). “The criminal justice system’s response to sexual violence”, *Violence against women*, 18(2), 2012, pp. 169-192.
- SPOHN, C., RODRIGUEZ, N., & KOSS, M., *The ‘victim declined to prosecute’: Accounting for lack of cooperation in sexual assault cases*, Paper presented at the annual meeting of the American Society of Criminology, St. Louis, MO, November, 2008.
- STUBBS, J. “Relations of Domination and Subordination: Challenges for Restorative Justice in Responding to Domestic Violence”. *UNSW Law Journal* 33, n.3, 2010, pp. 970-986.
- TAMARIT, J.P.; GUARDIOLA, M.J; HERNANDEZ- HIALGO, P.; PADRO-SOLANET, A., “La victimización sexual de menores de edad: un estudio de sentencias”, *Revista Española de Investigación Criminológica*, n. 12, 2014.
- VARONA MARTÍNEZ, G., “Adecuación de los procesos restaurativos en delitos de carácter sexual”, *Justicia restaurativa y terapéutica: Hacia innovadores modelos de justicia*, (Dir. de la Cuesta and Subijana), Valencia: Tirant, 2017, pp. 368-389;
- VIDU, A., VALLS, R., PUIGVERT, L., MELGAR, P., JOANPERE, M., “Second Order of Sexual Harassment - SOSH”, *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 7(1), 2017, pp. 1-26.
- VOCIARE Report by Victim Support Europe, June 2019.
- WEISS, K.G. “Too Ashamed to Report: Deconstructing the Shame of Sexual Victimization”, *Feminist Criminology*, 5(3), July 2010, pp. 286-310.
- ZINSSTAG, E., & KEENAN, M. (Eds.), *Restorative responses to sexual violence*. New York: Routledge, 2017.